

¡SOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD!

Guía para proporcionar una asistencia adecuada
en situaciones de conflictos armados
y emergencias humanitarias

SOS FOR WOMEN AND GIRLS WITH DISABILITIES!

A guide to providing appropriate assistance
in situations of armed conflict and humanitarian
emergencies

COLECCIÓN GENEROSIDAD



GÉNERO Y DISCAPACIDAD



GENEROSIDAD

COLECCIÓN GENEROSIDAD
GÉNERO Y DISCAPACIDAD

N.º 17

¡SOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD!

Guía para proporcionar una asistencia adecuada
en situaciones de conflictos armados
y emergencias humanitarias

SOS FOR WOMEN AND GIRLS WITH DISABILITIES!

A guide to providing appropriate assistance
in situations of armed conflict and humanitarian
emergencies





DIRECTORAS DE LA COLECCIÓN:

Ana Peláez Narváez
Pilar Villarino Villarino

PRIMERA EDICIÓN: octubre, 2022

© CERMI, Fundación CERMI Mujeres, 2022

© DEL TEXTO: CERMI, Fundación CERMI Mujeres

© ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: *Developing unity and nurturing knowledge*, de Manuel Delgado

Reservados todos los derechos.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

La responsabilidad de las opiniones expresadas en esta obra incumbe exclusivamente a sus autoras y su publicación no significa que Ediciones Cinca se identifique con las mismas.

DISEÑO DE LA COLECCIÓN

Juan Vidaurre

PRODUCCIÓN EDITORIAL,
COORDINACIÓN TÉCNICA E
IMPRESIÓN:

Grupo Editorial Cinca

c/ General Ibáñez Íbero, 5A

28003 Madrid

Tel.: 91 553 22 72.

grupoeditorial@edicionescinca.com

www.edicionescinca.com

ISBN: 978-84-18433-57-3

DEPÓSITO LEGAL: M-24225-2022

El PDF accesible y el EPUB de esta obra están disponibles a través del siguiente código QR:

¡SOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD!

Guía para proporcionar una asistencia adecuada en situaciones de conflictos armados y emergencias humanitarias

CERMI / Fundación CERMI Mujeres

SOS FOR WOMEN AND GIRLS WITH DISABILITIES!

A guide to providing appropriate assistance in situations of armed conflict and humanitarian emergencies

CERMI & CERMI Women's Foundation

Proyecto financiado por la convocatoria de subvenciones de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.

“El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas:

(...)

4. Subraya la conveniencia de proporcionar una asistencia sostenible, oportuna, adecuada, inclusiva y accesible a los civiles con discapacidad afectados por conflictos armados, incluidos servicios para la reintegración y rehabilitación y apoyo psicosocial, a fin de atender de manera eficaz las necesidades específicas de esas personas, en particular las de las mujeres y los niños con discapacidad.”

ÍNDICE

<u>PRÓLOGO</u>	9
<u>INTRODUCCIÓN</u>	11
<u>CONTEXTO GENERAL</u>	15
<u>RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS AGENTES SOCIALES</u>	19
1. <u>IDENTIDAD PERSONAL</u>	21
2. <u>DERECHO A TOMAR LAS PROPIAS DECISIONES</u>	25
3. <u>PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA</u>	31
4. <u>PROTECCIÓN CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL</u> ..	35
5. <u>DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDA EN LA COMUNIDAD</u>	41
6. <u>EDUCACIÓN Y FORMACIÓN</u>	47
7. <u>EMPLEO</u>	51
8. <u>PROTECCIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO</u>	55
9. <u>RESPECTO DEL HOGAR Y LA FAMILIA</u>	59

PRÓLOGO

A través de esta Guía queremos visibilizar el papel transformador de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en la construcción de una Europa social. Una Europa que cobra un protagonismo singular este año 2022, por diferentes motivos. La Conferencia sobre el Futuro de Europa, el hito en torno al que gira el proyecto **ODS UE** del CERMI, es un canal más a través del que las personas con discapacidad podemos participar activamente en la construcción de una nueva Europa social, cercana, que acompaña. Una nueva Europa que está en pleno proceso de construcción tras la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia. Una Europa que ha comenzado 2022 con una invasión injustificada, de efectos devastadores en las personas.

Las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad siguen siendo las más invisibles entre las personas demandantes de asilo y refugio y precisan que Europa les ofrezca una respuesta en clave de inclusión.

Esta Guía desgrana, a través de sus 9 apartados, una serie de recomendaciones que, siguiendo el hilo conductor del ODS 5, Igualdad de Género, reflejan los mandatos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, Educación de calidad, Agua limpia y saneamiento, Trabajo decente y crecimiento, Industria, innovación e infraestructuras, Reducción de las desigualdades, Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los objetivos.

CERMI

INTRODUCCIÓN

Esta guía ha sido elaborada por la Fundación CERMI Mujeres, a solicitud del CERMI, para ofrecer un asesoramiento efectivo a responsables públicos y agentes sociales sobre la atención a mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo, ante la ausencia de una respuesta específica, sistemática e inclusiva para su acogida por España o por otros países europeos. Bajo el principio fundamental de “Nada para nosotras sin nosotras”, la Guía ha tomado en consideración las recomendaciones emanadas de los testimonios de vida de algunas mujeres con discapacidad ucranianas y de relatos de madres de hijos e hijas con discapacidad forzadas a huir de sus territorios por los efectos del conflicto armado, así como de la experiencia de sus organizaciones representativas y de otras organizaciones de la sociedad civil de países fronterizos implicados en la ayuda humanitaria para personas con discapacidad; todo lo cual formó parte del seminario “SOS por las Mujeres y Niñas con Discapacidad de Ucrania”, que organizó Fundación CERMI Mujeres el 18 de marzo de 2022 y que se encuentra disponible en su página web (www.fundacioncermimujeres.es) y en el canal de YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=ZuGjnXvi1k0>).

Pese a que la Guía surge en el contexto de la guerra de Ucrania y de la respuesta de ayuda humanitaria ofrecida por los países europeos a su población civil, el asesoramiento y recomendaciones que aquí se presentan podrían ser trasladables a otros contextos geográficos y a otras situaciones de riesgo y emergencias humanitarias en donde igualmente se debería asegurar una atención adecuada a las mujeres y niñas con discapacidad y a otras mujeres al frente de familias de personas con discapacidad o en situación de dependencia.

Así pues, la Guía busca ofrecer una orientación a terceros países sobre las medidas que se deben adoptar en la política pública de ayuda humanitaria, migración, refugio y asilo desde un enfoque interseccional de género y discapacidad respetuoso con los derechos humanos, y propone sugerencias a las personas con responsabilidades públicas y agentes sociales (particularmente organizaciones de ayuda humanitaria, organizaciones de y para la discapacidad y organizaciones de mujeres) sobre cómo se debe prestar apoyo y una atención efectiva a las mujeres y niñas con discapacidad y a las madres con hijos e hijas con discapacidad que huyen de la guerra y de otros conflictos armados, en virtud de las obligaciones contraídas por los estados en los tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Para su elaboración se ha tomado en cuenta la *Resolución 1325 (2000) sobre mujer, paz y seguridad*, y la *Resolución 2475 (2019) sobre la protección de las Personas con Discapacidad en los conflictos armados*, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, así como los principios emanados de las recomendaciones adoptadas por sus Comités; en particular la *Recomendación general n° 30 sobre las mujeres en la prevención de conflictos* y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos, y la *Recomendación general n° 32 sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres* (del Comité CEDAW), y la *Observación general n° 3 sobre mujeres y niñas con discapacidad* (del Comité CRPD).

Más aún: no hay que olvidar que la Unión Europea también tiene contraídas obligaciones extraterritoriales de cooperación internacional con base legal en el derecho internacional humanitario y en el derecho internacional de derechos humanos, lo que debe aplicar para con las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo. Tal y como se recoge en *La Estrategia sobre los Derechos de las personas con Discapacidad para 2021-2030*, la Unión Europea debe prestar atención - con perspectiva de género y edad-, a tales personas en contextos de conflicto y posteriores a los conflictos, en los que a menudo carecen de protección y acceso a servicios básicos. Por su parte, *La Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020- 2025*, apela



a garantizar que las disposiciones legislativas de la UE, sus políticas y la aplicación de ambas deben responder a las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres y niñas pertenecientes a grupos desfavorecidos, como las mujeres y niñas con discapacidad. Por tanto, es imperativo reforzar el compromiso de la Unión Europea con terceros países en el marco de las políticas de ampliación y vecindad de la Unión y de su amplia agenda en materia de ayuda humanitaria y de cooperación para el desarrollo.

CONTEXTO GENERAL

Es sabido que las personas con discapacidad, por un lado, y que las mujeres y niñas, por otro, suelen ser objeto de violaciones graves de los derechos humanos durante la huida, el asentamiento y el regreso a las zonas afectadas por conflictos. La interacción de la discapacidad y el sexo con otros factores relevantes que afectan de manera significativa a cada una de estas poblaciones, provoca que las mujeres y niñas con discapacidad supervivientes sufran formas alarmantes y entrecruzadas de discriminación en el acceso a las medidas de seguridad y protección ofrecidas por los Estados.

La incapacitación legal y la ausencia de participación en la toma de decisiones; la institucionalización y el internamiento; las barreras de acceso a la información y a la comunicación y otras barreras de movilidad personal; la dependencia vital de terceras personas y las necesidades generalizadas de apoyo; el aislamiento y el abandono; la exposición a la explotación, la violencia y el abuso; la falta de medicación, de tratamientos de salud y de ayudas ortoprotésicas; y la ausencia generalizada de accesibilidad e inclusividad en la respuesta de ayuda humanitaria son factores que producen un importante impacto de género que desafortunadamente suele pasar desapercibido en la política pública. Lo mismo sucede con las particularidades que presentan los distintos tipos de discapacidad, que tienden a ser percibidos como realidades estereotipadas para todas las personas con discapacidad sin distinción alguna.

Además de estos condicionamientos individuales derivados de los efectos de la discapacidad, las mujeres con discapacidad son también mujeres mayores

y niñas; son viudas, cabezas de familia, madres solteras y mujeres embarazadas; son mujeres enfermas o que viven con el VIH/SIDA; son mujeres rurales y mujeres pobres; mujeres indígenas y mujeres pertenecientes a minorías étnicas, nacionales o religiosas; mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales; mujeres privadas de libertad y defensoras de los derechos humanos... Todas ellas pueden ser también mujeres desplazadas, refugiadas y solicitantes de asilo.

La ausencia de una planificación espacial adecuada y segura con infraestructuras eficientes y accesibles, tanto en los campamentos de refugiados como fuera de ellos, así como la falta de consideración de las necesidades por la interseccionalidad de género, edad y discapacidad en los programas de respuestas a las crisis humanitarias, originan que las mujeres y niñas con discapacidad estén sometidas a condiciones de extrema precariedad en los entornos de conflictos, ya que no participan en los procesos de adopción de decisiones y no acceden generalmente a la educación, la generación de ingresos y las actividades de formación profesional.

Aunque se da prioridad a las mujeres y los niños en la distribución de la ayuda humanitaria, las mujeres con discapacidad no siempre pueden obtener información sobre programas de socorro, ya que a menudo la información no está disponible en formatos accesibles. Cuando reciben información, tal vez no pueden acceder físicamente a los puntos de distribución. E incluso si lo consiguen, es posible que no puedan comunicarse con el personal.

Asimismo, si las mujeres con discapacidad son víctimas de violencia, explotación o abuso, es posible que las líneas telefónicas de ayuda y de emergencia y los servicios especializados no sean accesibles ni inclusivos.

Los campamentos de refugiados a menudo carecen de mecanismos de protección de la infancia para las niñas con discapacidad. Además, a menudo no existen instalaciones de saneamiento accesibles para garantizar la gestión de la higiene menstrual, lo que a su vez puede aumentar la exposición de las mujeres con discapacidad a la violencia.

Las mujeres con discapacidad solteras se enfrentan a obstáculos para una evacuación accesible a raíz de una situación de emergencia o desastre, espe-



cialmente si van acompañadas de sus hijos en el momento de la evacuación. Esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres desplazadas con discapacidad que no cuentan con la ayuda de un familiar adulto, amigos o cuidadores.

Las niñas con discapacidad desplazadas se enfrentan a obstáculos adicionales para acceder a la educación formal y no formal, especialmente en situaciones de crisis.

La falta de concienciación, capacitación y medidas para prevenir la fijación de estereotipos nocivos hacia las mujeres con discapacidad por parte de las personas que gestionan los programas de ayuda humanitaria y del personal vinculado a los mismos (como funcionarios públicos, docentes, sanitarios, trabajadores sociales, psicólogos, intérpretes, policía, fiscales o jueces, cooperantes y personas voluntarias, entre otras), a menudo puede dar lugar a la violación de derechos.

RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA Y LOS AGENTES SOCIALES

A través del presente documento se brinda asesoramiento para la adopción de medidas de seguridad y protección en situaciones de desplazamiento, refugio y solicitud de asilo de mujeres y niñas con discapacidad y de otras mujeres al frente de familias con personas con discapacidad.

Más concretamente, la Guía se centra en nueve esferas en las que las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de discriminaciones agravadas en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Estas esferas son: identidad personal; derecho a tomar las propias decisiones; protección contra la violencia; protección contra la trata y la explotación sexual; derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad; educación y formación; empleo; protección social y empoderamiento económico, y respeto del hogar y la familia. La consideración de cada una de estas áreas se ha llevado a cabo adoptando un enfoque interseccional basado en la aplicación de la *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)* y la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD)*.

Las medidas que aquí se proponen se deberían aplicar en todas las etapas del ciclo de desplazamiento; es decir, durante la huida, el asentamiento y el regreso a las zonas afectadas por conflictos. A lo largo de todas estas fases, las mujeres y las niñas con discapacidad, así como las mujeres con hijos e hijas con discapacidad, suelen ser objeto de violaciones graves de los derechos hu-



manos, que pueden tener lugar en cualquier momento del ciclo, incluso dentro y fuera de los campamentos de refugiados, por parte de autoridades públicas, miembros de las fuerzas armadas, agentes sociales, grupos rebeldes, familiares o personas encargadas de su asistencia y cuidado. Además, tienen un riesgo extraordinariamente alto a sufrir violencia sexual, trata y explotación sexual y económica por parte de cualquiera de ellos.

1. IDENTIDAD PERSONAL

Contexto general

Pese a que el derecho internacional obliga al registro de nacimiento e identidad de todas las personas con discapacidad, a quienes además les reconoce su derecho a la libertad de desplazamiento y para elegir su residencia, así como a una nacionalidad, los estereotipos patriarcales y capacitistas persistentes en la sociedad provocan que en la práctica las mujeres con discapacidad y las mujeres con hijos e hijas con discapacidad frecuentemente sean privadas de su capacidad para obtener, poseer y utilizar su propia documentación de identificación personal y la de sus hijos e hijas; y que no puedan salir de su país, ni tampoco regresar a él por razón de discapacidad o enfermedad, propias o de sus familiares a cargo, o por no contar con la autorización de su cónyuge o tutor. Por razones similares, además se enfrentan a obstáculos adicionales para adquirir o cambiar una nacionalidad e, incluso, pueden ser privadas de la suya de forma arbitraria. También enfrentan restricciones para utilizar procedimientos de inmigración, necesarios para el ejercicio del derecho de la libertad de desplazamiento.

Todas estas restricciones a la identidad personal y a la libertad de desplazamiento agravan desproporcionadamente la situación de huida, asentamiento y retorno de las mujeres y niñas con discapacidad y de mujeres a cargo de hijos e hijas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo.

Hay que tener presente que las mujeres y niñas con discapacidad que viven en situaciones de conflicto o de posconflicto o que proceden de ellas no suelen

estar en los registros de ayuda humanitaria y con frecuencia carecen de documentación de identidad personal, lo que se traduce en una privación de derechos.

Algunas de las causas que provocan la indocumentación de las mujeres y niñas con discapacidad en estos contextos son la falta de registro de nacimiento, la incapacitación legal, la institucionalización, el abandono y el aislamiento, lo que las expone desproporcionadamente a la violencia y a la trata con fines de explotación sexual, mendicidad o tráfico de órganos. Además, el desplazamiento ocasiona una dependencia vital de la mujer o niña con discapacidad de terceras personas, que pueden tener intereses ilícitos con fines de trata y explotación sexual, por lo que los traficantes pueden utilizar documentación falsa o engañosa, así como la retención o destrucción de pasaportes y de otros documentos de identidad personal.

RECOMENDACIONES

- ① Facilitar con carácter de extrema urgencia la obtención independiente de documentos oficiales de identidad personal de mujeres y niñas con discapacidad indocumentadas, sin exigirles que obtengan el permiso de un cónyuge masculino o de la persona que en la práctica ejerza su tutela.
- ② Afrontar los problemas de vulnerabilidad que experimentan las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas que no cuentan con documentos de identidad legales, lo que las expone especialmente a ser víctimas de la trata con fines sexuales. Deberían existir garantías para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad indocumentadas durante todas las etapas del ciclo de desplazamiento; es decir, durante la huida, en el asentamiento y al regreso.
- ③ Conceder con carácter de urgencia la condición de refugiadas y permisos de asilo o residencia a mujeres y niñas con discapacidad indocumentadas y/o víctimas de violencia o trata por motivos humanitarios.



- ④ Revisar las condiciones para conceder la nacionalidad y los permisos de residencia a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a las mujeres cuidadoras y a sus familiares con discapacidad a cargo, a fin de mitigar las consecuencias de la dependencia de su cónyuge y las condicionalidades discriminatorias por razón de discapacidad o enfermedad en la legislación aplicable.

2. [DERECHO A TOMAR LAS PROPIAS DECISIONES](#)

Contexto general

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce inequívocamente a las personas con discapacidad como "sujetos" de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, lo que lleva implícito el principio de participación plena y efectiva, la autonomía personal y la libertad para tomar las propias decisiones. El derecho a tomar las propias decisiones está interrelacionado con el ejercicio de otros derechos humanos, por lo que si este prerrequisito no se cumple, se estarán conculcando los derechos consiguientes.

Sin embargo, con frecuencia se sigue prescindiendo de las opiniones de las mujeres y niñas con discapacidad y su derecho a decidir sobre todas las cuestiones que les afecten, anteponiendo el criterio de terceras personas para tomar decisiones en su nombre (frecuentemente familiares y profesionales), a quienes se sigue atribuyendo sistemáticamente la facultad de representarlas. En el caso de mujeres objeto de cualquier modalidad de tutela o institucionalizadas, así como de mujeres con discapacidad intelectual, psicosocial, con sordoceguera, con parálisis cerebral y con necesidades generalizadas de apoyo la vulneración de este derecho es extrema.

Las mujeres y las niñas con discapacidad han encontrado históricamente numerosos obstáculos para participar en la adopción de decisiones, tanto en la esfera privada como en la pública, debido a los desequilibrios de poder basados en el género y la discapacidad, a los estereotipos culturales patriarcales y a formas múltiples e interseccionales de discriminación. En términos generales sus opiniones no suelen tenerse plenamente en cuenta y en ocasiones son objeto

de represalias por expresar sus puntos de vista y preocupaciones, especialmente en relación con la salud y los derechos sexuales y reproductivos; con la violencia doméstica, incluida la violencia sexual, y con la custodia de sus hijos e hijas. Además, las mujeres con discapacidad han tenido menos oportunidades de crear organizaciones que puedan representar sus intereses y exigir sus derechos por ser mujeres, de un lado, y por tener discapacidad, de otro, o de afiliarse a ellas.

Como consecuencia del condicionamiento social y de los patrones de conducta arraigados en el seno de la familia, de las barreras de comunicación y acceso limitado a información relevante, así como por el temor a perder la confianza y apoyo de las personas de su entorno más cercano, las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo no suelen expresar su opinión ni sus preferencias, y cuando lo hacen pueden estar condicionadas por otras personas por motivos de supervivencia.

De ahí que en las situaciones de riesgo y emergencias humanitarias sea importante que los responsables públicos y los agentes humanitarios aseguren la participación activa, la coordinación y la consulta sustantiva de todas las mujeres y niñas con discapacidad sin excepción para cualquier cuestión que les afecte. Ello requiere una colaboración activa con sus organizaciones representativas, especialmente con organizaciones de mujeres con discapacidad migrantes y refugiadas, para la elaboración, la aplicación y el seguimiento de legislación y políticas relacionadas con las situaciones de emergencias y el establecimiento de prioridades en la distribución de la ayuda de socorro.

La participación plena y efectiva de las mujeres y niñas con discapacidad en estos contextos es una herramienta de transformación para cambiar la sociedad y promover la igualdad de género y el empoderamiento y capacidad de acción de todas las mujeres.

RECOMENDACIONES

- ① Asegurar la consulta individual, privada y efectiva a las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo sobre todas las cuestiones que les afecten, cualquiera que sea su deficiencia, edad o circunstancia vital (como la raza, la etnia, la orientación sexual e identidad de género, la nacionalidad o procedencia entre otras) con garantías suficientes para impedir los abusos y respetar su voluntad y preferencias, evitando que existan conflictos de intereses e influencia indebida de familiares o profesionales.
- ② Esta consulta debería hacerse en un entorno de confianza por una mujer en el idioma de origen de la mujer o niña con discapacidad y, cuando sea necesario, mediante cualquier forma de comunicación accesible de su elección (como la lengua de signos, el sistema dactilológico, el braille, y cualquier otro modo o medio alternativo y aumentativo de comunicación), incluyendo la provisión de ajustes razonables para el apoyo en la toma de decisiones.
- ③ Proporcionar igualmente a las niñas con discapacidad refugiadas apoyo para la toma de decisiones, entre otras cosas ofreciéndoles y permitiéndoles utilizar cualquier modo de comunicación que sea necesario para facilitar la expresión de sus opiniones de forma segura, lo que incluye información apta para su edad y un apoyo suficiente para que defiendan sus propios derechos y puedan opinar sobre todas las cuestiones que les afecten, opiniones que deberían tenerse siempre debidamente en cuenta en consonancia con su edad y grado de madurez.
- ④ Para garantizar el derecho de las mujeres con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo a decidir sobre sus vidas y las cuestiones que repercutan directamente sobre ellas, se debería asegurar que las autoridades públicas competentes facilitaran eficazmente

su acceso a la justicia ante decisiones tomadas sin su consentimiento que repercutan negativamente en sus derechos. Algunos recursos eficaces serían: a) la suspensión del procedimiento derivado de la decisión; b) el retorno a una fase anterior del procedimiento para garantizar la consulta y la voluntad de la mujer; c) el aplazamiento de la ejecución de la decisión hasta que se haya efectuado la consulta pertinente; y d) la anulación, total o parcial, de la decisión.

- ⑤ Llevar a cabo consultas estrechas y potenciar la participación activa de las mujeres y niñas con discapacidad para la aprobación de todos los planes y estrategias dirigidos a atender a la población refugiada o solicitante de asilo a lo largo de todo el ciclo del desplazamiento. Dicha consulta debe hacerse desde un enfoque dual o de doble vía, centrado, por un lado, en las circunstancias específicas e individuales de las mujeres y niñas con discapacidad y de mujeres a cargo de familiares con discapacidad, y, de otro, en un análisis holístico de necesidades como grupo particularmente desfavorecido, a través de sus organizaciones representativas, especialmente organizaciones de mujeres con discapacidad migrantes y refugiadas.
- ⑥ Cuando no existan en el terreno organizaciones específicas de mujeres con discapacidad migrantes o refugiadas, o como fortalecimiento de las mismas en caso afirmativo, se debería apoyar la creación de redes informales de mujeres y niñas con discapacidad y de mujeres a cargo de familiares con discapacidad en los centros de refugiados y después en otros emplazamientos, como un recurso valioso en el terreno para fortalecer su empoderamiento individual y colectivo.
- ⑦ Ofrecer formación sobre las cuestiones de género y discapacidad en la toma de decisiones desde un enfoque de derechos humanos, en la teoría y en la práctica, a los responsables de la política de

ayuda humanitaria, refugio y asilo; al personal de los servicios de los centros de refugiados, incluido el personal voluntario, y al personal que trabaje en la atención de los grupos desfavorecidos de refugiados o solicitantes de asilo, como las personas con discapacidad y las mujeres.

- ⑧ A través de los esfuerzos de la cooperación internacional, apoyar la creación y el trabajo de organizaciones de personas con discapacidad y de mujeres desplazadas internas o refugiadas que puedan promover sus derechos en cualquier situación de riesgo, incluidos los conflictos armados, a través de la concesión de fondos directos, evitando que haya terceras partes como intermediarias.

3. PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA

Contexto general

Es sabido que las mujeres con discapacidad corren un riesgo desproporcionado de sufrir violencia, ya sea interpersonal o institucional y/o estructural, así como que la violencia de género contra la mujer ocasiona discapacidad.

Además de la violencia de género y la violencia doméstica ejercida por parejas y por otros miembros de la familia, las mujeres y niñas sufren también formas específicas de violencia por razón de su discapacidad. Algunas de esas formas particulares son la fuerza física o mecánica; el internamiento y los tratamientos forzados; la coacción legal y la coerción económica; la intimidación, la manipulación psicológica, el engaño y la desinformación, así como la ausencia de consentimiento previo, libre e informado para cualquier decisión concerniente a sus vidas.

Los estereotipos nocivos contra las mujeres y niñas con discapacidad basados en comportamientos patriarcales y capacitistas (como los que las infantilizan o las perciben asexuadas o hipersexuadas; y los que ponen en tela de juicio su capacidad para tomar decisiones y cuidar de otras personas), así como las creencias erróneas de superstición y de curación de enfermedades de transmisión sexual manteniendo relaciones íntimas con una mujer virgen, aumentan el riesgo de las mujeres y niñas con discapacidad a sufrir prácticas nocivas, violencia sexual y violencia institucional por violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales.

Las mujeres y particularmente las niñas con discapacidad están expuestas a sufrir prácticas nocivas, que se justifican invocando costumbres y valores socioculturales y religiosos. Algunas de esas prácticas nocivas son la muerte piadosa, el matrimonio precoz y forzado, la esterilización involuntaria, los embarazos forzados y los abortos inseguros o coercitivos.

La violencia sexual contra las mujeres y niñas con discapacidad incluye la violación por personas de su entorno cercano, la cual se puede producir en la familia, en las instituciones donde residen o son atendidas y en otros contextos comunitarios, como escuelas, letrinas públicas, hospitales y comisarías de policía. Algunas mujeres y niñas con discapacidad, en particular las que presentan necesidades generalizadas de apoyo y deficiencias múltiples y más limitantes, pueden correr un riesgo aún mayor de violencia y malos tratos a causa de su aislamiento, dependencia u opresión. También es probable que las niñas con discapacidad no sean inscritas al nacer y que cuando sean adultas no dispongan de documentación de identificación personal, todo lo cual provoca la ocultación, el abandono y la violencia, incluida la violencia sexual y la explotación sexual, por parte de familiares y cuidadores, que aumentan durante la pubertad.

El desplazamiento, refugio y asilo debido a un conflicto armado y durante emergencias humanitarias agravan el riesgo de las mujeres y niñas con discapacidad a la violencia extrema, dado que con frecuencia no tiene una respuesta de las autoridades públicas y agentes sociales para protegerlas y poner fin a la violencia y a otras formas concomitantes de violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren y que pueden considerarse, incluso, actos de tortura, como el matrimonio precoz y forzado, la servidumbre familiar, el incesto y el abandono.

En estos contextos de desplazamiento y refugio, no resulta fácil identificar a las mujeres y niñas con discapacidad que son víctimas de violencia doméstica, las cuales suelen ser más dependientes económica, física o emocionalmente de sus agresores, que frecuentemente ejercen de cuidadores, situación que impide que estas pongan fin a relaciones abusivas y las lleva a un mayor aislamiento social. En otros casos donde se han identificado a tales víctimas, los alojamientos seguros y los servicios especializados de violencia de género

contra la mujer en centros de refugiados no son accesibles para estas mujeres y niñas, ni tienen en cuenta sus necesidades específicas, por lo que rara vez acceden a servicios de recuperación y rehabilitación, y menos aún a la justicia.

RECOMENDACIONES

- ① Proporcionar en los centros de refugiados y asentamientos transitorios en terceros países recursos jurídicos y servicios de apoyo accesibles y gratuitos para las víctimas de violencia de género contra la mujer y de abusos contra ellas.
- ② Derivar con carácter de urgencia a todas las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia y de prácticas nocivas, como el matrimonio precoz y forzado, la servidumbre familiar y el abandono, a los servicios especializados de violencia de género contra la mujer y a los alojamientos seguros para ellas y para sus hijos e hijas que se encuentren disponibles en zonas fronterizas con los territorios en conflicto o disponibles en centros de refugiados y en otros asentamientos análogos de ayuda humanitaria.
- ③ Asegurar que en los contextos de conflictos armados y emergencias humanitarias, todos los servicios para la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sean plenamente accesibles y respondan a las necesidades particulares que puedan presentar las víctimas con discapacidad, incluyendo la provisión de ajustes razonables y la asistencia personal necesaria.
- ④ Ofrecer formación al personal implicado en la ayuda humanitaria y a los cuerpos de seguridad para la detección, atención y derivación a los servicios especializados de violencia de género contra la mujer de todas las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia.

- ⑤ Luchar contra la violencia de género en todas las instituciones donde se alojan mujeres, niñas y personas con discapacidad; entre otras cosas mediante alojamientos e instalaciones de letrinas y saneamiento separadas para mujeres y hombres debidamente supervisadas, y capacitando al personal para detectar a las posibles víctimas.
- ⑥ Adoptar una política de tolerancia cero frente a la violencia para con todas las personas que atienden o acompañan a las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo.
- ⑦ Formar a las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente a las que viven en zonas fronterizas, migrantes en tránsito o en contexto de destino, para reconocer actos de violencia perpetrados por personas de su entorno directo o por personas desconocidas y sobre los servicios que tienen disponibles y los derechos que les asisten.
- ⑧ Garantizar el acceso a procedimientos de denuncia y a mecanismos de reparación en los casos de mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo víctimas de violencia y de prácticas nocivas, como el matrimonio precoz y forzado, asegurando ajustes de procedimiento y otros ajustes razonables en el sistema de justicia.

4. PROTECCIÓN CONTRA LA TRATA Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

Contexto general

Las mujeres y las niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas y explotación sexual. Este mayor riesgo se produce no sólo debido a la interseccionalidad de las características personales de sexo, edad y discapacidad con otros factores de exclusión social (como la raza o la etnia, la religión y la orientación e identidad de género, entre otros), sino por la ausencia de respuesta específica respetuosa con los derechos humanos de autoridades públicas y agentes sociales para las mujeres y niñas con discapacidad en situación de migración irregular; para las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, apátridas o en riesgo de apatridia; para las mujeres y niñas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo, incluidas aquellas cuyas solicitudes han sido rechazadas; para las mujeres y niñas con discapacidad que viven en situaciones de conflicto armado o de posconflicto o que proceden de ellas; para las mujeres y niñas con discapacidad institucionalizadas o en situación de acogimiento, y para las mujeres y niñas con discapacidad abandonadas, sin techo o que están solas.

Las mujeres y niñas con discapacidad integrantes de estos grupos no suelen estar inscritas en registros oficiales y frecuentemente carecen de documentación, en ocasiones porque las personas de quienes dependen se la retienen o destruyen. Además, generalmente soportan la carga de las actividades domésticas y del cuidado de personas, al tiempo que son ocultadas y excluidas de otras actividades familiares y obligadas a permanecer en el hogar, sin derecho a la educación, a tener un empleo digno o a participar de las actividades co-

munitarias. Sufren formas agravadas de violencia, malos tratos y descuido en el entorno familiar, y pueden ser sometidas al matrimonio infantil, forzado y servil o a privaciones debidas a la viudez. El resultado ante estas violaciones sistemáticas de derechos humanos es muchas veces su abandono en una institución asistencial.

Hay que tener en cuenta, además, que también son numerosos los casos de mujeres y niñas que adquieren deficiencias y enfermedades discapacitantes como consecuencia de la trata y de la explotación sexual en el contexto de la migración global o en otros contextos. En estos casos y en otros, también las víctimas pueden ocultar su discapacidad como consecuencia del estigma y rechazo social que provocan tales circunstancias.

A pesar de la fuerte evidencia de que las mujeres y las niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de ser objeto de trata, los instrumentos internacionales sobre el tema, como la *Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional* y el *Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños*, no abordan sus situaciones específicas. Más aún: en la mayoría de las ocasiones, la investigación y las políticas existentes para combatir la trata y la explotación sexual tampoco refieren la discapacidad, lo que contribuye al desconocimiento sobre cómo las mujeres y niñas con discapacidad se ven afectadas por estos delitos y sobre la falta de adopción de medidas específicas para prevenir, combatir y sancionar la trata y explotación sexual que enfrentan.

La escasa información disponible sobre trata y explotación sexual de mujeres y niñas con discapacidad señala que las que viven en instituciones están particularmente expuestas a ser víctimas del tráfico de órganos y que las que son romaníes pueden verse sometidas a la mendicidad. También está documentado que las mujeres y niñas con discapacidad que no están acompañadas o han quedado separadas de su familia u otras estructuras de apoyo debido al desplazamiento son particularmente vulnerables a la trata y explotación sexual, incluso por parte de personas supuestamente encargadas de su cuidado en tales circunstancias.

También se sabe que los traficantes de personas utilizan la discapacidad de las mujeres y niñas como incentivo para la trata a través de la mendicidad, la explotación laboral y servidumbre, incluido el matrimonio forzado, y para la explotación sexual, debido a que las consideran más fáciles de manipular, ya que es posible que no se identifiquen de inmediato como víctimas o porque es menos probable que les crean cuando denuncian el abuso. Además, los traficantes saben que la discapacidad de las mujeres y niñas provoca mayor comprensión y respuesta social; que ante la urgencia de las situaciones de emergencias humanitarias hay una mayor facilidad para justificar su acompañamiento, cuidado y tutela y evadir responsabilidades documentales y de otro tipo; y que son “mano de obra fácil y barata” para la demanda creciente de consumidores de pornografía y de servicios de prostitución con mujeres que presentan discapacidades intelectuales o psicosociales, amputaciones, acondroplasia y otras deficiencias “llamativas”.

La falta de conciencia de las mujeres y las niñas con discapacidad sobre sus derechos y sobre lo que constituye “trata” y “explotación sexual”, así como el miedo a represalias y temor a la pérdida del apoyo y el abandono, conduce a problemas de autoidentificación como víctimas y rara vez revelan la identidad de las personas que las explotan. Pero también la falta de conciencia del Estado, del personal del orden y la seguridad y de otros actores sociales ocasiona que no se tomen medidas adecuadas de prevención o respuesta para proteger sus derechos.

Los centros de refugiados y otros entornos donde viven personas migrantes, desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo pueden favorecer situaciones de trata o de explotación sexual de mujeres, niños y niñas y de personas con discapacidad; sobre todo cuando no cuentan con una planificación adecuada de servicios e instalaciones seguros y accesibles, con medidas concretas de protección y atención a grupos desfavorecidos, y cuando el personal no ha recibido formación en cuestiones de género y discapacidad desde un enfoque respetuoso con los derechos humanos.

RECOMENDACIONES

- ① En contextos de conflicto y emergencias humanitarias, detectar, ayudar y proteger a las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de la trata y explotación sexual; impedir su revictimización, incluso prohibiendo el retorno forzoso, y garantizar su acceso efectivo a la justicia y el castigo de los autores. Es necesario prestar una atención prioritaria para la detección y protección adicional a las mujeres y niñas con discapacidad que presentan otras condiciones de vulnerabilidad, como las señaladas más arriba.
- ② Las víctimas con discapacidad de trata y explotación sexual o presuntas víctimas deben ser derivadas con carácter de urgencia a los servicios de asistencia especializada en este ámbito, cuyo personal debe recibir formación específica sobre discapacidad y sobre sus necesidades particulares desde un enfoque de derechos humanos. Estos servicios de atención a víctimas de trata, que deben ser plenamente accesibles y tienen que incluir la provisión de los ajustes razonables que se precisen, tienen que estar disponibles para las mujeres y niñas con discapacidad de forma inmediata y deben ofrecerles información accesible y comprensible para ellas sobre sus derechos y sobre los recursos médicos, psicológicos, sociales y jurídicos que tienen disponibles y la forma de acceder a ellos.
- ③ Además, se debe intensificar los esfuerzos para que todas las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de violencia, trata y explotación sexual tengan acceso a una asistencia personal de su elección lo antes posible y a una ayuda económica básica de supervivencia que tenga en cuenta los costes extraordinarios por razón de discapacidad.
- ④ Prevenir la trata y la explotación sexual en todas las instituciones donde se alojan mujeres, niñas y personas con discapacidad; entre otras cosas mediante alojamientos e instalaciones de letrinas y saneamiento separadas para mujeres y hombres debidamente super-

visadas, y capacitando al personal de los centros de refugiados para detectar a las posibles víctimas.

- ⑤ Adoptar una política de tolerancia cero frente a la trata y la explotación sexual para con todas las personas que atienden o acompañan a las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo.
- ⑥ Formar a las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente a las que viven en zonas fronterizas, migrantes en tránsito o en contexto de destino, sobre sus derechos y los medios y motivos para reconocer actos de trata y explotación sexual y para evitar a los traficantes de personas.
- ⑦ Garantizar el acceso a procedimientos de denuncia y a mecanismos de reparación en los casos de mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo víctimas de trata y explotación sexual, asegurando ajustes de procedimiento en el sistema de justicia y otros ajustes razonables.
- ⑧ Garantizar la participación plena, efectiva y significativa de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los niveles decisorios y en todas las etapas de los esfuerzos para prevenir y combatir la trata y la explotación sexual, a fin de asegurar que las medidas de respuesta tengan adecuadamente en cuenta las cuestiones de género y discapacidad desde un enfoque plenamente respetuoso con los derechos humanos.
- ⑨ Los Estados deberían considerar la adopción de sanciones más severas para los traficantes que explotan a mujeres y niñas debido a su discapacidad.

5. DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y A SER INCLUIDA EN LA COMUNIDAD

Contexto general

El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad incumbe a todas las personas con discapacidad sin excepción, independientemente de otras condiciones personales, sociales o económicas, como la edad, el sexo, la raza, la etnia, la identidad de género y orientación sexual, la nacionalidad, la condición de refugio o asilo y cualquier otra condición.

Según se establece en el artículo 19 de la CRPD, la idea central del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad es la libertad de la persona con discapacidad para elegir cómo, dónde y con quién vivir. Consecuentemente, sus decisiones personales no se limitan al lugar de residencia, sino que abarcan todos los aspectos del sistema de vida de la persona, sus horarios, rutinas y modos y estilos de vida, tanto en la esfera privada como en la pública, y tanto en lo cotidiano como a largo plazo. Ello implica asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la asistencia personal y a otros servicios de asistencia domiciliaria que puedan precisar, así como que también las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén disponibles para ellas y tengan en cuenta sus necesidades.

El derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad debe ser, pues, el principio que guíe la política pública de respuesta a las personas con discapacidad en situaciones de conflictos armados y emergencias humanitarias a lo largo de todo el ciclo del desplazamiento. Esa respuesta inclusiva de responsables políticos y agentes sociales debe tener en cuenta, ade-

más, las necesidades particulares que presentan las mujeres y niñas por razón de género y que se agravan en dichos contextos.

Por tanto, las mujeres y niñas con discapacidad migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo tienen derecho a decidir dónde y con quién quieren vivir, así como a contar con la asistencia personal que precisen para facilitar su vida, su inclusión social y evitar su aislamiento.

Este derecho debe ser respetado tanto en los centros de refugiados, como en los acogimientos temporales en otros países. Para garantizar la libertad que debe tener una mujer con discapacidad para elegir y controlar su vida, incluida la libertad de elección de la asistencia personal, se debe asegurar la consulta directa a la mujer, previa y oportunamente informada, con garantías para impedir los abusos y respetar su voluntad y preferencias, asegurando que no haya conflictos de intereses ni influencias indebidas de otros miembros de la familia, de acompañantes o de profesionales.

Dado que a menudo las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a más restricciones en cuanto al lugar de residencia y a su sistema de vida por los estereotipos paternalistas y los modelos sociales patriarcales que discriminan a las mujeres en la sociedad, sufren mayor exclusión, aislamiento e institucionalización, y corren un riesgo elevado de sufrir violencia, incluida la violencia sexual, abusos y acoso de las personas de su entorno; todo lo cual se agrava exponencialmente para ellas en situaciones de conflictos y emergencias humanitarias.

Por otro lado, también las normas y los valores culturales pueden restringir negativamente las opciones y el control que tienen las mujeres y las niñas con discapacidad desplazadas o refugiadas sobre sus vidas, limitar su autonomía, obligarlas a vivir de una forma determinada, exigirles que obvien sus propias necesidades y, en su lugar, atiendan a las de los demás y hacer que adopten determinadas funciones en el seno de la familia.

Por ello, para hacer efectivo el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, las políticas de ayuda humanitaria deben prestar especial atención a la igualdad de género, a la eliminación de la discriminación

interseccional contra las mujeres de grupos desfavorecidos, como las que tienen discapacidad, y a la prevalencia de modelos sociales patriarcales.

RECOMENDACIONES

- ① Asegurar la consulta individual, privada y efectiva a las mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo sobre dónde, cómo y con quién quieren vivir, así como para cualquier otra cuestión que les afecte, incluida la libertad de elección de la asistencia personal, con garantías suficientes para impedir los abusos y respetar su voluntad y preferencias. Esta consulta debería hacerse por una mujer en el idioma de origen de la mujer o niña con discapacidad y, cuando sea necesario, mediante cualquier forma de comunicación accesible de su elección (como la lengua de signos, el sistema dactilológico, el braille, y cualquier otro modo o medio alternativo y aumentativo de comunicación), incluyendo la provisión de ajustes razonables para el apoyo en la toma de decisiones.
- ② Los centros de refugiados y programas de ayuda humanitaria deben contar no sólo con intérpretes del idioma de origen de la población atendida, sino también con profesionales para asegurar que la comunicación y el acceso a la información sean accesibles para todas las personas con discapacidad.
- ③ Proporcionar servicios de asistencia personal gratuitos a las mujeres con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo que lo precisen para facilitar su vida, su inclusión social y evitar su aislamiento. En la adjudicación de la asistencia personal deberían tener preferencia las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo; las mujeres con necesidades intensas y generalizadas de apoyo por razón de discapacidad, y las mujeres con discapacidad con hijos e hijas o con otros familiares a cargo.

- ④ Facilitar servicios de ayuda domiciliaria gratuita a mujeres con familiares con discapacidad, y a mujeres con discapacidad con hijos e hijas o con otros familiares a cargo. En este último caso, la ayuda domiciliaria debería ser compatible con la de asistencia personal.
- ⑤ Asegurar que las instalaciones y los servicios de los centros de refugiados para la población en general estén disponibles para las personas con discapacidad y tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y niñas, particularmente en lo que respecta a la disponibilidad de saneamientos para mujeres seguros y accesibles; apoyo para la gestión menstrual; servicios de salud sexual y reproductiva, y servicios de atención a víctimas de violencia de género y de trata.
- ⑥ Establecer mecanismos de supervisión, recursos jurídicos y medios de reparación para todas las personas con discapacidad refugiadas o solicitantes de asilo usuarias de servicios de apoyo por razón de discapacidad o de cualquier otro servicio que puedan ser objeto de abuso y violencia por parte de proveedores de dichos servicios.
- ⑦ Realizar periódicamente encuestas y otras consultas a las mujeres y niñas con discapacidad, por un lado, y a mujeres a cargo de familiares con discapacidad o en situación de dependencia, por otro, sobre las barreras físicas, de comunicación, ambientales, de infraestructuras y actitudinales que enfrentan como refugiadas y/o solicitantes de asilo, y sobre sus necesidades específicas para llevar a la práctica el principio de inclusión y el derecho a la igualdad y no discriminación a través de la puesta en marcha de medidas afirmativas para ellas en los centros de refugiados y en sus nuevos destinos.

- ⑧ Asegurar que la respuesta de ayuda humanitaria ofrecida a las personas con discapacidad desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo sean inclusivas y basadas en la vida en la comunidad. La segregación, separación o institucionalización no deberían nunca ser una opción para ellas.
- ⑨ Establecer criterios para garantizar que las inversiones realizadas como respuesta a las situaciones de desastres y emergencias humanitarias motivados por los conflictos armados no contribuyan a perpetuar la segregación y las barreras a la inclusión que excluyen a las personas con discapacidad, particularmente a mujeres y niñas, de la comunidad.

6. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Contexto general

Según la UNESCO, la tercera parte de los niños y niñas sin escolarizar del mundo tienen discapacidad.

Millones de niñas y mujeres con discapacidad se ven privadas del derecho a la educación, a causa de formas interrelacionadas de discriminación basadas en el género y la discapacidad. Esta exclusión del derecho a la educación de las niñas y mujeres con discapacidad en cualquiera de sus formas (ya sea educación general, inclusiva o especial) suele agravarse por otros factores como la condición de desplazamiento, refugio y asilo.

En situaciones de conflicto armado y emergencias humanitarias, el desplazamiento impone barreras concretas al aprendizaje: se pierden recursos humanos, se destruye infraestructura y, durante la huida, muchos niños y niñas dejan atrás la documentación que exige el nuevo Estado para matricularse en otra escuela. El desplazamiento puede resultar particularmente perjudicial para las niñas, porque la situación de mayor inseguridad hace que algunos padres y madres las mantengan en el hogar.

Las niñas y las mujeres con discapacidad en situación de desarraigo forzoso suelen acabar en campamentos de refugiados en los que no hay escuelas o las que hay son improvisadas y de capacidad limitada, no tienen planes de estudios ni se imparte instrucción en su lengua, y son inaccesibles. Por tanto, se quedan fuera. Además, los estereotipos discriminatorios hacia ellas por parte del per-

sonal encargado de los centros de refugiados o de los servicios que en ellos se imparten suelen derivarlas a actividades ocupacionales en el mejor de los casos.

Esta misma práctica discriminatoria hacia las niñas y mujeres con discapacidad se suele repetir cuando dejan los centros de refugiados y se instalan en un nuevo lugar de residencia, generalmente un nuevo país con un idioma y una cultura que no conocen.

Hay que tener en cuenta que, aunque muchos Gobiernos promueven oficialmente la educación inclusiva, en la práctica se sigue excluyendo y segregando en escuelas especiales a los niños y niñas con discapacidad, especialmente a las niñas. Esto se hace particularmente evidente cuando se trata de niños y niñas con dificultades añadidas, como en el caso del desplazamiento, el refugio o el asilo.

Las causas de las reducidas tasas de asistencia escolar de las niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas o solicitantes de asilo son similares en todo el mundo; a saber, inaccesibilidad de las instalaciones y del sistema educativo; actitudes negativas del personal docente o directivo para la matriculación de estudiantes con discapacidad extranjeros; falta de adaptación de los planes de estudios y de los materiales didácticos a sus necesidades y, más en general, estigmatización y desconocimiento de la comunidad educativa, lo que da pie a actitudes negativas sobre la capacidad de aprendizaje de estas niñas y mujeres.

Además, los centros educativos no suelen contar con docentes para atender las necesidades particulares de las niñas con discapacidad en situación de refugio o asilo, para el aprendizaje del idioma (incluida la lengua de signos y otros sistemas alternativos a la comunicación oral), para la alfabetización digital y para la formación sobre educación sexual y reproductiva, entre otras.

Por otra parte, rara vez estas niñas con discapacidad cuentan con certificación de su nivel académico, ya que con frecuencia proceden de sistemas segregados de educación especial sin reconocimiento oficial en sus países de origen.

RECOMENDACIONES

- ① Velar por que los planes de estudio, el material didáctico y las estrategias pedagógicas dirigidas a las personas desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo se adapten a las necesidades específicas de las personas con discapacidad con perspectiva de género y derechos humanos.
- ② Asegurar que todas las niñas y mujeres con discapacidad accedan a todos los servicios de educación y formación ofrecidos en los programas dirigidos a personas desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo, detectando y suprimiendo las barreras jurídicas, físicas, sociales, financieras, actitudinales, de comunicación, lingüísticas o de cualquier otra índole en los centros de enseñanza y en las comunidades donde residen.
- ③ Adoptar en el país de acogida las medidas necesarias para asegurar que no se discrimine a las niñas y mujeres con discapacidad en ningún nivel de la enseñanza, favoreciendo su acceso a un sistema de educación inclusiva y garantizando los ajustes razonables que precisen para la atención a sus necesidades particulares.
- ④ Favorecer la certificación del nivel académico de origen de los niños y niñas con discapacidad, incluso cuando no cuenten con documentación oficial que lo acredite.
- ⑤ Asegurar que las niñas y mujeres con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo reciban en el país de acogida formación sobre el aprendizaje del idioma (incluida la lengua de signos y otros sistemas alternativos a la comunicación oral), la alfabetización digital y la educación sexual y reproductiva.
- ⑥ Garantizar una protección adecuada de las niñas con discapacidad contra el bullying y la violencia sexual en los entornos escolares,

y ofrecerles apoyo cuando lo requieran para la gestión de su higiene menstrual.

- ⑦ Establecer medidas especiales de carácter temporal para favorecer la educación y formación de niñas y mujeres con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo, incluyendo becas y acciones de toma de conciencia dirigidas a ellas y a sus familias.

7. [EMPLEO](#)

Contexto general

En general, se puede decir que las tasas de empleo de las mujeres con discapacidad de todo el mundo son menores que las de los hombres con discapacidad y que las de las mujeres sin discapacidad. Cuando existen otros factores interrelacionados que agravan las condiciones de partida de las mujeres con discapacidad para su acceso al mercado laboral (como la edad, la raza, la etnia, la orientación sexual e identidad de género, la condición de refugio o asilo, entre otros muchos), sus tasas de empleo son ínfimas con respecto a sus iguales.

Las mujeres con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo suelen estar excluidas del mercado de trabajo, no sólo por los múltiples obstáculos de accesibilidad y otros derivados de estereotipos negativos de género, discapacidad y discursos xenófobos, sino por otros motivos mucho más profundos impuestos por su condición de refugio y asilo.

Cuando estas mujeres llegan al destino del país que las acoge acompañadas de sus hijos e hijas o de otros familiares en situación de dependencia, la prioridad es la supervivencia y unidad de la familia a cualquier precio. En estas circunstancias, agravadas por la elevada incidencia de la viudez y de la violencia sexual como consecuencia de los conflictos bélicos, el riesgo a la trata, a la explotación sexual o a la servidumbre es particularmente elevado para estas mujeres.

Hay que tener en cuenta, además, que en pocas ocasiones las mujeres con discapacidad refugiadas han desarrollado una actividad laboral remunerada, incluso en sus países de origen. Esta precaria o nula experiencia laboral de partida, unida a la falta de formación profesional acorde con la oferta laboral y demanda del nuevo contexto socioeconómico, al desconocimiento del idioma, al analfabetismo digital y a la carencia de teléfonos inteligentes y conectividad a internet, así como el no disponer de servicios de apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas y de servicios de apoyo a las situaciones de dependencia de otros familiares, las condenan a seguir estando fuera del mercado de trabajo en su nuevo destino.

Si, pese a todo lo anterior, las mujeres con discapacidad refugiadas consiguen un trabajo digno, con frecuencia son víctimas de discriminaciones en los procesos de contratación, retención, ascensos, salarios y acceso a formación, créditos y otros recursos productivos, lo que tiene una incidencia directa en la permanencia futura en el país que las acoge.

RECOMENDACIONES

- ① Ofrecer una respuesta individualizada para la formación profesional de calidad, prácticas profesionales remuneradas y acceso al mercado laboral a mujeres con discapacidad y a madres de hijos e hijas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo.
- ② Poner en marcha medidas efectivas de apoyo a las mujeres con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo para la búsqueda y mantenimiento de trabajos dignos de calidad.
- ③ Garantizar los ajustes razonables que precisen las mujeres con discapacidad refugiadas para el desempeño laboral, y ofrecer las ayudas técnicas o de otra índole que precisen para ello.
- ④ Promover la transición de las madres de hijos e hijas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo de la economía infor-

mal a la formal, y ofrecerles sistemas de protección social relevantes, incluido el acceso a servicios de guarderías infantiles y a servicios de día para personas en situación de dependencia.

- ⑤ Llevar a cabo programas inclusivos de alfabetización digital dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad refugiadas, facilitando la adquisición de dispositivos electrónicos accesibles y de bajo coste, como tabletas y teléfonos inteligentes, y acceso gratuito a internet.
- ⑥ Promover el aprendizaje del idioma local por las mujeres con discapacidad refugiadas o solicitantes de asilo, incluyendo el aprendizaje de la lengua de signos y el uso de otros apoyos a la comunicación oral cuando se requieran.
- ⑦ Desarrollar campañas de toma de conciencia entre las mujeres con discapacidad y las mujeres a cargo de familiares con discapacidad sobre oportunidades de formación profesional, ofertas de trabajo, derechos laborales, la prevención del acoso en el lugar de trabajo, y otros recursos disponibles para la conciliación de la vida personal y profesional.

8. PROTECCIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

Contexto general

El Banco Mundial estima que en los países de ingresos bajos y medios las mujeres constituyen hasta el 75 % de todas las personas con discapacidad.

La pobreza y la marginación se agravan cuando se entrecruzan el género y la discapacidad con situaciones de desplazamiento forzado, refugio y asilo.

En esos contextos, las mujeres con discapacidad tienen barreras agravadas que impiden su acceso a una vivienda adecuada y accesible; a la atención sanitaria, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva; a una formación profesional de calidad, y a un trabajo digno con el que ganarse la vida, en igualdad de condiciones con las demás personas, debido a prejuicios culturales y de género, discursos xenófobos y capacitistas, así como por la falta de accesibilidad y escasez de recursos.

Los países receptores de mujeres y niñas con discapacidad no cuentan con medidas efectivas de apoyo para encontrar y mantener empleos de calidad, ni con programas de protección social para ellas.

Por otro lado, las mujeres y niñas refugiadas y/o solicitantes de asilo enfrentan particulares barreras para el acceso a las prestaciones económicas por discapacidad, dado que para muchas de ellas esta condición se ha adquirido como consecuencia del conflicto armado en sus territorios de origen o del desplazamiento en la huida.

Existe la preocupación de que los mecanismos existentes de apoyo para garantizar ingresos se estén mermando en el contexto de la austeridad global, incluso en países de ingresos altos, con posibles consecuencias profundas para las mujeres con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo en lo que se refiere a la pobreza.

RECOMENDACIONES

- ① Tomar medidas concretas para reducir la pobreza y la precariedad de las mujeres con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo.
- ② Facilitar de forma inmediata el certificado de discapacidad a mujeres y niñas refugiadas y/o solicitantes de asilo que presenten dicha condición y asegurar que conozcan y se beneficien de las prestaciones de discapacidad en el país de destino proporcionándoles cuando sea necesario la información accesible en sus lenguas de origen (incluida la lengua de signos y otros sistemas alternativos a la comunicación oral).
- ③ Asegurar el acceso a prestaciones familiares a mujeres con discapacidad y a madres de hijos e hijas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo, eliminando los obstáculos particulares a los que éstas se enfrentan por su limitado acceso a la información, dominio del idioma y falta de alfabetización digital y acceso a internet.
- ④ Asegurar el acceso a una vivienda digna y accesible a las mujeres con discapacidad y madres de hijos e hijas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo.
- ⑤ Todas las ayudas monetarias que se concedan a mujeres refugiadas y/o solicitantes de asilo por razón de discapacidad de ellas o de sus familiares a cargo deben ser entregadas directamente a las

beneficiarias, evitando que haya terceras partes como intermediarios.

- ⑥ Ofrecer formación accesible a las mujeres con discapacidad sobre el uso y valor de la moneda utilizada en el país de acogida.
- ⑦ Facilitar la obtención de préstamos bancarios, hipotecarios y otras formas de crédito financiero a las mujeres con discapacidad y a madres de hijos e hijas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo.
- ⑧ Promover la participación de las mujeres y niñas con discapacidad refugiada y/o solicitantes de asilo en las actividades sociales, culturales y deportivas.

9. RESPECTO DEL HOGAR Y LA FAMILIA

Contexto general

La fijación de estereotipos indebidos relacionados con la discapacidad y el género es una forma de discriminación interseccional persistente en todo el mundo contra las mujeres y niñas con discapacidad que tiene repercusiones especialmente graves en el disfrute del derecho a fundar una familia, limitando o negando –incluso en la legislación y en otras normas consuetudinarias– su capacidad reproductiva y su libertad para tener pareja o para decidir el número de hijos que quieren tener. Estos mismos estereotipos nocivos, que suelen estar basados en conceptos como la incapacidad o la inhabilidad, pueden dar lugar a que las madres con discapacidad pierdan de manera desproporcionada el contacto y la custodia de sus hijos e hijas, que son objeto de procedimientos de adopción y/o son colocados en una institución tutelada por terceros. Además, puede concederse al marido la separación o el divorcio, así como la custodia monoparental de los hijos e hijas sobre la base de la discapacidad de la mujer.

También los estereotipos basados en el género y la discapacidad impactan negativamente en otras mujeres en forma de discriminación por asociación por asumir el cuidado de sus hijos e hijas con discapacidad o de otros familiares en situación de dependencia. Esta discriminación por asociación se traduce frecuentemente en un obstáculo o reducción significativa de oportunidades laborales de la mujer por la creencia de que sea una trabajadora menos comprometida o que esté menos disponible a causa de su hijo o hija con discapacidad.

Por otro lado, como resultado de estereotipos paternalistas y los modelos sociales patriarcales que discriminan a las mujeres en la sociedad, frecuentemente las mujeres y niñas con discapacidad de buena parte del mundo sufren aislamiento social, segregación y explotación en el seno de la familia; en particular mediante la exclusión de las actividades familiares, la prohibición de salir del hogar, la obligación de realizar trabajo doméstico no remunerado y la prohibición de asistir a la escuela. En estos contextos, los matrimonios de las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente de las que presentan una discapacidad intelectual, suelen justificarse con el pretexto de prever seguridad, atención y financiación en el futuro. A su vez, el matrimonio infantil contribuye a las elevadas tasas de abandono escolar y a partos precoces y frecuentes de las niñas con discapacidad.

Además, las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a las mismas prácticas nocivas perpetradas contra las mujeres y niñas sin discapacidad, como el matrimonio precoz y/o forzado, la mutilación genital femenina, las esterilizaciones no consentidas, los delitos cometidos por motivos de “honor”, la violencia por causa de la dote y las prácticas relacionadas con la viudez, entre otras.

Cuando, pese a las obligaciones adquiridas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos los países limitan la capacidad jurídica de una mujer o de una persona con discapacidad mediante sus leyes, o permiten que los individuos o las instituciones hagan otro tanto, no sólo se les está negando su derecho a la igualdad con el hombre y con el resto de la ciudadanía, sino que también se les está limitando su capacidad de proveer a sus necesidades y a las de sus familiares a cargo.

Todas las circunstancias expuestas hasta aquí se agravan para las mujeres y niñas con discapacidad y para las mujeres a cargo de familiares con discapacidad en situación de desplazamiento, refugio y/o asilo, por lo que las políticas de migración y ayuda humanitaria deben tenerlas presente y establecer medidas concretas para una atención adecuada.

RECOMENDACIONES

- ① Reconocer el derecho en la teoría y en la práctica de todas las mujeres con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo a casarse o establecer uniones de hecho, así como a fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges, con independencia de su discapacidad, orientación sexual e identidad de género o cualquier otra circunstancia personal. Eso implica su derecho a decidir en dónde y con quién quieren vivir.
- ② Reconocer el derecho en la teoría y en la práctica de todas las mujeres con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y ofrecerles los medios necesarios que permitan ejercer ese derecho, como el acceso a servicios de planificación familiar y educación sexual.
- ③ Prestar formación y asistencia apropiada, incluida la asistencia personal y la ayuda domiciliaria gratuitas, a las madres con discapacidad para el ejercicio de sus obligaciones y responsabilidades en lo que respecta a la custodia y crianza de sus hijos e hijas. Las autoridades públicas competentes velarán particularmente por que en ningún caso se separe a un niño o niña de su madre por razón de discapacidad de alguno de ellos o de ambos.
- ④ Facilitar la ayuda domiciliaria gratuita a mujeres refugiadas a cargo de familiares con discapacidad o en situación de dependencia, así como acceso a servicios de guarderías infantiles y de día para personas en situación de dependencia.
- ⑤ Cuando la familia inmediata no pueda cuidar de los niños y niñas con discapacidad refugiados y/o solicitantes de asilo se deberá proporcionar la atención alternativa dentro de la familia extensa o, de no ser posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

- ⑥ Proteger e impedir que las mujeres y niñas con discapacidad refugiadas y/o solicitantes de asilo sean víctimas de matrimonios o uniones de hecho precoces y forzados, que pueden darse en el transcurso del desplazamiento, y asegurar que todos los casos detectados sean investigados y, en su caso, juzgados.
- ⑦ Asegurar que los centros de refugiados cuentan con servicios de prevención y protección para niñas y mujeres que son o corren un alto riesgo de ser víctimas de prácticas nocivas (como el matrimonio precoz y/o forzado, la mutilación genital femenina, las esterilizaciones no consentidas, los delitos cometidos por motivos de “honor”, la violencia por causa de la dote y las prácticas relacionadas con la viudez, entre otras), y que tales servicios son inclusivos y accesibles, incluyendo una línea de atención telefónica gratuita operativa las 24 horas del día, para permitir que las víctimas denuncien tales prácticas.
- ⑧ Promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de prácticas nocivas.
- ⑨ Facilitar con carácter de urgencia por razón de discapacidad la reagrupación familiar de mujeres y niñas desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo.

SOS FOR WOMEN AND GIRLS WITH DISABILITIES!

A guide to providing appropriate assistance
in situations of armed conflict and humanitarian
emergencies

CERMI & CERMI Women's Foundation

“The United Nations Security Council,

[...]

4. Underlines the benefit of providing sustainable, timely, appropriate, inclusive and accessible assistance to civilians with disabilities affected by armed conflict, including reintegration, rehabilitation and psychosocial support, to ensure that their specific needs are effectively addressed, in particular those of women and children with disabilities;”

CONTENTS

<u>INTRODUCTION</u>	67
<u>OVERALL CONTEXT</u>	71
<u>RECOMMENDATIONS FOR PUBLIC POLICIES AND SOCIAL AGENTS</u> .	75
1. <u>PERSONAL IDENTITY</u>	77
2. <u>THE RIGHT TO TAKE ONE’S OWN DECISIONS</u>	79
3. <u>PROTECTION FROM VIOLENCE</u>	83
4. <u>PROTECTION FROM TRAFFICKING AND SEXUAL EXPLOITATION</u> .	87
5. <u>THE RIGHT TO LIVE INDEPENDENTLY AND BE INCLUDED IN THE COMMUNITY</u>	93
6. <u>EDUCATION AND TRAINING</u>	97
7. <u>EMPLOYMENT</u>	101
8. <u>SOCIAL PROTECTION AND ECONOMIC EMPOWERMENT</u>	105
9. <u>RESPECT FOR THE HOME AND FAMILY</u>	107

INTRODUCTION

This guidebook has been drawn up by CERMI Women’s Foundation, following a request from CERMI, to offer effective guidance to policymakers and social agents on assistance for women and girls with disabilities who are displaced or are refugees and/or asylum seekers, in the face of a lack of specific, systematic and inclusive responses regarding reception by Spain and other European countries.

Under the fundamental principle of “Nothing about us without us”, this guide draws on recommendations from real-life testimonies and accounts of Ukrainian mothers of boys and girls with disabilities who were forced to flee from their homes as a result of the ongoing armed conflict, as well as from the experiences of their representative organisations and other civil society organisations from neighbouring countries involved in offering humanitarian aid to persons with disabilities. All of these topics were addressed in the seminar “SOS for Ukrainian women and girls with disabilities”, hosted by CERMI Women’s Foundation on 18th March 2022 and available on its web site (www.fundacioncermimujeres.es) and YouTube channel (<https://www.youtube.com/watch?v=Z0TEDxS5tmQ>).

While these guidelines were developed in the context of the war in Ukraine and the humanitarian response by European countries to its civilian population, the guidance and recommendations herein can be transposed to a variety of geographic contexts and varying situations involving risk and humanitarian emergencies, where it is equally necessary to provide suitable assistance to

women and girls with disabilities and to other women who are heads of families containing members with disabilities or dependent persons.

This guide therefore seeks to advise third countries on the measures that should be adopted in public policies addressing humanitarian aid, migration and refugee and asylum status from a human-rights based intersectional approach considering gender and disability. It puts forward suggestions for those holding public responsibilities and social agents –and in particular humanitarian aid organisations, organisations of and for persons with disabilities and women’s organisations– as to how they should provide effective support and assistance to women and girls with disabilities and to the mothers of boys or girls with disabilities who flee from war and other armed conflicts, in keeping with states’ obligations under international human rights treaties and international humanitarian law.

In drafting this guidebook, the following have been taken into consideration: United Nations Security Council *Resolutions 1325 (2000) on women, peace and security and 2475 (2019) on protection of persons with disabilities in armed conflict; the obligations acquired by State Parties to the Convention for the Elimination of all Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities; and the principles drawn from the recommendations adopted by their respective committees, and in particular CEDAW Committee General Recommendations No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations and No. 32 on the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women, and CRPD Committee General Comment No. 3 on women and girls with disabilities.*

Moreover, we mustn’t forget that the European Union has also taken on board extraterritorial obligations in international co-operation with a legal basis in international humanitarian law and international human rights law, and that these obligations also cover women and girls with disabilities who are displaced, refugees and/or asylum seekers. As stated in its Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030, the European Union must provide gender- and age-sensitive assistance to these people in conflict and post-conflict contexts, where they are often unprotected and cannot access



basic services. Furthermore, the European Union Gender Equality Strategy 2020-2025 includes a call to ensure that EU legal provisions and policies and their application address the specific needs and circumstances of women and girls from disadvantaged groups, such as women and girls with disabilities.

It is, therefore, imperative to reinforce the European Union's commitment to third countries in the framework of its enlargement and neighbourhood policies and its wide-ranging humanitarian aid and international co-operation agenda.

OVERALL CONTEXT

It is common knowledge that persons with disabilities, on the one hand, and women and girls, on the other, are often subjected to serious violations of their human rights when fleeing from areas affected by conflict, settling in other areas and returning to conflict zones. Disability and sex interact with other relevant factors significantly affecting each of these groups, leading to women and girls with disabilities who survive being subjected to alarming and overlapping forms of discrimination when attempting to access the security and protection measures provided by states.

Legal incapacitation and non-participation in decision-making; institutionalisation and interment; barriers in accessing information and communication and other personal mobility-related obstacles; reliance for survival on third persons and general support needs; isolation and neglect; exposure to exploitation, violence and abuse; shortages in medication, healthcare and prosthetic and orthotic aids; and widespread shortcomings in accessibility and inclusivity in humanitarian aid responses are all factors that have a significant gender impact which, unfortunately, tends to remain overlooked in public policies. The same occurs with the specificities related to different types of disability, which tend to be viewed as stereotypical realities for all persons with disabilities, without distinction.

Over and above these individual difficulties due to the impact of disability, women with disabilities are also older women and girls; they are widows, heads of households, single mothers and pregnant women; they are sick or women who live with HIV/Aids; they are rural women and poor women; indigenous



women and women who belong to ethnic, national or religious minorities; they are lesbians, bisexuals and transexuals; women deprived of their freedom and women human rights defenders...they can all become displaced women, refugees and asylum seekers too.

A lack of suitable and safe spatial planning with efficient and accessible infrastructures, both in refugee camps and in other locations, as well as a disregard for needs due to the intersectionality of gender, age and disability in responses to humanitarian crises, lead to women and girls with disabilities being subjected to extremely precarious conditions in conflict zones as they cannot play a role in decision-making and generally do not access education, income-generating activities and vocational training.

Although women and children are given priority in the distribution of humanitarian aid, women with disabilities cannot always obtain information about relief programmes as it is often not available in accessible formats. When they do receive information, they may not be physically able to access distribution centres, and even if they do, they may then not be able to communicate with relief personnel.

Moreover, if women with disabilities are victims of violence, exploitation or abuse, emergency telephone hotlines and specialised support services may be inaccessible and non-inclusive.

Refugee camps often lack protection systems for children with disabilities. Furthermore, there are often no accessible sanitation facilities to ensure proper menstrual hygiene management, which may also increase women with disabilities' exposure to violence.

Single women with disabilities face obstacles to accessible evacuation in emergency and disaster situations, and in particular if they are accompanied by their children during evacuation. This disproportionately affects displaced women with disabilities who do not have support from an adult relative, friends or a caregiver.



Displaced girls with disabilities are faced with additional barriers when accessing formal and non-formal education, and especially in crises.

A lack of awareness, training and measures to prevent harmful stereotypes surrounding women with disabilities among those people responsible for managing humanitarian aid programmes and staff involved in delivering them –such as civil servants, teachers, healthcare staff, social workers, psychologists, interpreters, police forces, prosecutors, judges, partners and volunteers, among others– can often lead to human rights violations.

RECOMMENDATIONS FOR PUBLIC POLICIES AND SOCIAL AGENTS

This publication offers guidance for the adoption of safety and protection measures for women and girls with disabilities and other women heads of families with persons with disabilities in situations involving displacement, refugee status and seeking asylum.

More specifically, it focuses on nine areas in which women and girls with disabilities are victims of aggravated forms of discrimination according to international human rights treaties and international humanitarian law. These are: personal identity; the right to take one's own decisions; protection from violence; protection from trafficking and sexual exploitation; the right to live independently and be included in the community; education and training; employment; social protection and economic empowerment; and respect for the home and family.

Each of these areas is addressed in this guidebook through an intersectional approach based on the application of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

The measures set out in this guide should be implemented during all phases in the displacement cycle; that is to say, when fleeing, when settling and when returning to conflict-affected areas. Throughout all these stages, women and girls with disabilities and women with sons and daughters with disabilities are



often victims of serious infringements of their human rights, which can occur at any time during the various phases, including inside and outside refugee camps, at the hands of public authorities, members of the armed forces, social agents, rebel groups, and relatives or people in charge of their care or assistance. Moreover, they face an extraordinarily high risk of falling victim to sexual violence, trafficking and sexual and economic exploitation by any of the above.

1. PERSONAL IDENTITY

Overall context

Although international law includes an obligation for all persons with disabilities to be registered at birth and provided with proof of identity and a nationality, and recognises their right to freedom of movement and to select their place of residence, persisting patriarchal and ableist social stereotypes often lead to women with disabilities and women who give birth to children with disabilities being denied their right to obtain, possess and use their own personal identification document and that of their offspring in practise. Furthermore, they may not be allowed to leave their country of residence or return to it on account of their disability or illness or that of dependent relatives, or because they do not have permission from their spouse or tutor. For similar reasons, they also face additional obstacles to acquire nationality or change nationality and they may even be deprived of their nationality arbitrarily. They also face barriers in negotiating immigration procedures which are necessary to ensure the right to freedom of movement can be exercised.

All these restrictions in the field of personal identity and freedom of movement disproportionately aggravate the situation faced by displaced, refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities and women with children with disabilities when escaping, settling and returning.

We must bear in mind that women and girls with disabilities who live in or originate from conflict or post-conflict settings are not normally registered for humanitarian aid and they frequently do not have personal identity documents, thus leading to them being deprived of their rights.

Some of the causes that lead to women and girls with disabilities being undocumented in these situations are the lack of birth registration, legal incapacitation, institutionalisation, neglect and isolation, leaving them disproportionately exposed to violence and trafficking for sexual exploitation, forced begging and organ trafficking. Moreover, displacement gives rise to women and girls with disabilities becoming reliant for survival on third persons, who may have illicit motives in terms of trafficking and sexual exploitation, so traffickers may use false or fraudulent documentation or retain or destroy passports and other personal identification documents.

RECOMMENDATIONS

- ① As a matter of extreme urgency, facilitate the independent issuance of official personal identity documents to undocumented women and girls with disabilities, without asking for permission from a male spouse or from their tutor.
- ② Take steps to address the vulnerability faced by displaced women and girls with disabilities who do not have legal identification documents, thus leaving them particularly exposed to trafficking for sexual exploitation purposes. Guarantees must be put in place to protect undocumented women and girls with disabilities during all phases of the displacement cycle; that is to say, when escaping, settling and returning.
- ③ As a matter of urgency and on humanitarian grounds, grant refugee status, asylum or residence to undocumented women and girls with disabilities and/or victims of violence or trafficking.
- ④ Review the conditions for granting nationality and residence permits to women and girls with disabilities, as well as to women carers and their dependent relatives with a disability, in order to mitigate the consequences of reliance on the spouse and the discriminatory conditionalities in applicable law due to disability or illness.

2. THE RIGHT TO TAKE ONE'S OWN DECISIONS

Overall context

International human rights law unequivocally recognises that persons with disabilities are “holders” of all human rights and fundamental freedoms, thus acknowledging implicitly the principles of full and effective participation, personal autonomy and freedom to decide for oneself. The right to take one’s own decisions is interlinked with the exercise of other human rights, so if it is not upheld then other rights are infringed.

Nevertheless, the opinions of women and girls with disabilities and their right to take decisions on matters affecting them are often ignored; priority is given to the criteria of third parties who take decisions on their behalf (often relatives or practitioners) and who are still systematically granted power to represent them. In the case of women who are subjected to any type of guardianship or institutionalisation, and women with intellectual or psychosocial disability, women living with deafblindness, cerebral palsy or greater support needs, the infringement of this right is severe.

Women and girls with disabilities have traditionally come up against numerous obstacles to participating in decision-making processes, both in the private and public spheres, due to gender- and disability-based power imbalances, patriarchal cultural stereotypes and multiple and intersectional forms of discrimination. In general, their opinions are not fully taken into account and, on occasions, they suffer reprisals for expressing their points of view and concerns, in particular in relation to health and sexual and reproductive rights, domestic violence (including sexual violence) and custody

of their sons and daughters. Moreover, women with disabilities have had fewer opportunities to set up or join organisations that represent their interests and advocate for their rights as women, on the one hand, and as persons with disabilities on the other.

As a result of social conditioning and entrenched patterns of conduct within families, communication barriers and limited access to relevant information and fear of losing the confidence and support of those closest to them, displaced, refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities cannot express their opinions and preferences, and when they do so they may be under constraint from other people in order to survive.

This is why in situations involving risk and humanitarian emergencies it is important for public decision-makers and humanitarian aid personnel to ensure full participation, co-ordination and meaningful consultation with all women and girls with disabilities without exception for any reason. This requires co-operating actively with their representative organisations, and in particular with organisations of women migrants and refugees, to draw up, apply and monitor laws and policies on emergency situations and to establish priorities in distributing relief.

The full and effective participation of women and girls with disabilities in these contexts is a transformative tool to change society and promote gender equality, empowerment and capacity for action of all women.

RECOMMENDATIONS

- ① Ensure individual, private and effective consultations with displaced, refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities on all issues affecting them, regardless of their impairment, age or life circumstances (such as race, ethnicity, sexual orientation, gender identity, nationality and place of origin, among others), with suitable safeguards to avoid abuse. Their wishes and preferences must be respected and conflicts of interest and undue influence by relatives and professionals must be avoided.

② These consultations must be carried out by a woman in a safe place and in the native languages of the women and girls with disabilities. Where necessary, they should be performed using any type of accessible communication chosen by the women and girls with disabilities (such as sign language, tactile interpretation, braille or any other alternative or augmentative modes or means of communication) and reasonable accommodations must be available to support decision making.

③ Girls with disabilities who are refugees should also be given support for decision making by, among others, offering and allowing any means of communication necessary to enable them to express their opinions safely, including age-appropriate information and adequate support for them to advocate for their own rights and express their views on issues affecting them. These views must always be taken into consideration adequately in accordance with their age and maturity.

④ To ensure the right of refugee and/or asylum-seeking women with disabilities to take decisions regarding their own lives and issues directly affecting them, relevant public authorities must facilitate efficient access to justice in cases involving decisions made without their consent that have a negative impact on their rights. Useful resources in this respect include: a) the suspension of any procedures deriving from the decision; b) reverting to a previous stage of the procedure to ensure the woman with disabilities is consulted and her wishes respected; c) deferment of the execution of the decision until the relevant consultation has taken place; and d) complete or partial reversal of the decision.

⑤ Consult meaningfully with and foster the active participation of women and girls with disabilities in approval processes for all plans and strategies aimed at supporting refugees and asylum seekers during the entire displacement cycle. These consultations should follow a dual or twin-track approach that focuses on the

one hand on the specific and individual circumstances of women and girls with disabilities and women responsible for relatives with disabilities and, on the other, on a holistic analysis of their needs as a particularly disadvantaged group, and they should involve their representative organisations, and in particular organisations of migrant and refugee women with disabilities.

⑥ Where there are no specific organisations of migrant and refugee women with disabilities on the ground, or to strengthen them where they do exist, support should be given to set up informal networks of women and girls with disabilities and women with relatives with disabilities in their care in refugee centres and in other settings. This is a valuable grassroots tool to foster individual and collective empowerment.

⑦ Offer information on gender and disability issues during decision-making processes based on a human rights approach, both in theory and in practise, to those in charge of humanitarian aid, refugee and asylum policies, to staff delivering services in refugee centres, including volunteers, and to those attending to the needs of disadvantaged groups of refugees and asylum seekers, such as persons with disabilities and women.

⑧ Through international co-operation efforts, support the creation and work of organisations of persons with disabilities and women who are displaced internally or refugees. These organisations can advocate for their rights in any situation of risk, including in armed conflict, by receiving direct funding, thus avoiding interference from third persons as intermediaries.

3. PROTECTION FROM VIOLENCE

Overall context

It is known that women with disabilities run a disproportionate risk of suffering violence, whether it be interpersonal violence or institutional and/or structural violence, and that gender-based violence against women causes disability.

In addition to the gender-based and domestic violence caused by partners and other members of the family, women and girls also face specific forms of violence as a result of their disability. Some of these particular forms of violence are: physical or mechanical force; internment and forced treatment; legal and economic coercion; intimidation; psychological manipulation; deceit and misinformation; and disregard for prior, free and informed consent for any decision concerning their lives.

Harmful stereotypes surrounding women and girls with disabilities and based on patriarchal and ableist attitudes (such as those that infantilise them or consider them asexual or hypersexual, and those that question their capacity to take decisions and care for others), and the mistaken superstitious belief that sexually transmitted diseases can be cured by having sexual relations with a virgin woman, increase the risk women and girls with disabilities face of suffering harmful practises, sexual violence and institutional violence through systematic violations of their fundamental rights.

Women and in particular girls with disabilities are exposed to harmful practises which are justified by invoking sociocultural and religious customs

and values. These harmful practises include mercy killings, early and forced marriage, involuntary sterilisation, forced pregnancies and unsafe and coerced abortions.

Sexual violence against women and girls with disabilities includes rape at the hands of people close to them, which can happen in family settings, institutions where they live or receive care, and other community-based contexts such as schools, public toilets, hospitals and police stations. Some women and girls with disabilities, and especially those with greater support needs and multiple and more limiting types of disability, may run an even greater risk of violence and abusive treatment because of their isolation, dependence on others and oppression. It is also likely that girls with disabilities are not registered at birth, so when they are adults they do not have personal identity documentation, leading to concealment, neglect and violence, including sexual violence and exploitation at the hands of relatives and carers, in particular during puberty.

Displacement and becoming a refugee and/or asylum seeker due to an armed conflict or during a humanitarian emergency heighten the risk women and girls face of extreme violence. They often receive no response from public authorities and social agents to protect them and put an end to violence and other accompanying forms of systematic violation of their human rights which can even be considered acts of torture, such as early and forced marriage, family servitude, incest and neglect.

In such contexts of displacement and refuge, it is not easy to identify those women and girls with disabilities who are victims of domestic violence. They tend to rely more economically, physically and emotionally on the aggressor, who is often their carer, and this prevents them from putting an end to abusive relationships and leads to greater social isolation. In other cases where victims have been detected, safe houses and services specialised in gender-based violence against women in refugee centres are not accessible to these women and girls and do not take into account their specific needs, so they are rarely able to access recovery and rehabilitation services, and much less access justice.

RECOMMENDATIONS

- ① Provide legal resources and accessible, free support services to victims of gender-based violence against women and abuse against women in refugee centres and temporary settlements in third countries.
- ② Urgently refer all women and girls with disabilities who are victims of violence and harmful practises such as early and forced marriage, family servitude and neglect, to specialist services for gender-based violence against women and to safe accommodation available for them and their sons and daughters in regions bordering conflict zones, refugee centres and other similar humanitarian aid settlements.
- ③ In the context of armed conflicts and humanitarian emergencies, ensure that all services designed for women and girls who fall victim to violence are fully accessible and respond to any specific needs victims with disabilities may have, including the provision of reasonable accommodations and any necessary personal assistance.
- ④ Provide training to personnel delivering humanitarian aid and law enforcement authorities to be able to detect cases of gender-based violence against women, provide assistance and refer all cases involving women and girls with disabilities to specialist services.
- ⑤ Combat gender-based violence in all institutions where women, girls and persons with disabilities live, among other initiatives by providing suitably supervised and separate accommodation and toilet and sanitation facilities for women and men and training personnel to identify potential victims.

- ⑥ Adopt zero-tolerance policies to violence for anyone who assists or accompanies women and girls with disabilities who are displaced, refugees and/or asylum seekers.
- ⑦ Educate women and girls with disabilities, and especially those living in border regions, migrants in transit or who have reached their destination, to recognise acts of violence by those around them and by strangers, and on available services and their rights.
- ⑧ Ensure access to reporting procedures and redress mechanisms for displaced, refugee and/or asylum-seeking women with disabilities who are victims of violence and other harmful practises such as early or forced marriage, while ensuring procedural adjustments and other reasonable accommodations in the justice system.

4. PROTECTION FROM TRAFFICKING AND SEXUAL EXPLOITATION

Overall context

Women and girls with disabilities are at greater risk of falling victim to human trafficking and sexual exploitation. This increased risk is a consequence not only of the intersectionality of personal characteristics such as sex, age and disability, among other factors leading to social exclusion (for instance race, ethnicity, religion, sexual orientation or gender identity), but also the result of an absence of human-rights based, tailor-made responses from public authorities and social agents for the following groups: women and girls with disabilities whose migrant status is irregular; women and girls with disabilities who are displaced, stateless or at risk of becoming stateless; refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities, including those whose application has been rejected; women and girls with disabilities who live in situations of armed conflict or post-conflict or who have escaped from such situations; institutionalised women and girls with disabilities and those in foster families; and women and girls with disabilities who are abandoned, homeless or alone.

Women and girls with disabilities in these groups are not normally registered in official records and frequently do not have personal identity documents, at times because the people they rely on retain or destroy them. Moreover, they generally bear the burden of domestic work and caring for others while they are hidden away, excluded from other family activities and made to stay at home, without a right to education, to a decent job or to



participate in community activities. Women and girls with disabilities suffer aggravated forms of discrimination, ill treatment and neglect in the family setting and may be subjected to child marriage, forced or servile marriage or hardships due to widowhood. The consequence of these systematic human rights infringements is that they are often abandoned in a care setting.

It must be borne in mind, moreover, that there are also many cases of women and girls who acquire impairment and disabling illnesses as a result of trafficking and sexual exploitation in the context of global migration and in other contexts. In these cases and others, victims may try to hide their disability due to the stigma and social rejection associated with this condition.

Despite overwhelming evidence that women and girls with disabilities run a higher risk of trafficking, international instruments on this subject, such as the United Nations Convention against organised transnational crime and the Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, do not address their special situation. Furthermore, on most occasions research and policies to combat trafficking and sexual exploitation fail to mention disability, which leads to a lack of knowledge on how women and girls with disabilities are affected by these crimes and a lack of specific measures to prevent, combat and punish the trafficking and sexual exploitation they suffer.

The scarce information we do have concerning the trafficking and sexual exploitation of women and girls with disabilities indicates that those living in institutions are particularly exposed to organ trafficking and that Roma women and girls with disabilities may be subjected to forced begging. It has also been reported that unaccompanied women and girls with disabilities or those who have been separated from their families and other support structures due to displacement are particularly vulnerable to trafficking and sexual exploitation, including at the hands of people who are supposedly in charge of caring for them in these circumstances.

We also know that people traffickers use women's and girls' disability as an incentive for trafficking through begging, labour exploitation and servitude, including forced marriage, and for sexual exploitation because they are

considered to be easier to manipulate and may not be identified immediately as victims and they are less likely to be believed if they report abuse. Furthermore, traffickers know that women and girls with disability provoke greater sympathy and response from society and that given the urgency in humanitarian emergencies it is easier to justify accompanying them, care and guardianship and avoid the need to show documents and other obligations. They also know that women and girls with disabilities are considered “easy, cheap labour” for the increasing demand for pornography and prostitution with women with intellectual or psychosocial disabilities, amputees, achondroplasia and other “eye-catching” impairments.

A lack of awareness among women and girls with disabilities concerning their rights and what constitutes “trafficking” and “sexual exploitation”, as well as fear of reprisals, loss of support and neglect, leads to problems of self-identification as victims and they rarely reveal their identity to the people who are exploiting them. However, a lack of awareness also among state actors, law enforcement officials and other social agents means that suitable prevention measures and responses to protect their rights are not adopted.

Refugee centres and other settings in which migrants, displaced persons, refugees and asylum seekers live can foster situations in which trafficking and sexual exploitation of women, girls and persons with disabilities can occur, and above all if there is no suitable planning for services and safe and accessible facilities, with concrete protection and support measures for disadvantaged groups, and if staff have not received training on gender and disability issues following a human-rights based approach.

RECOMMENDATIONS

- ① Detect, support and protect women and girls with disabilities who are victims of trafficking and sexual exploitation in conflicts and humanitarian emergencies, prevent revictimization, including by banning forced returns, and guarantee effective access to justice and punishment for perpetrators. Priority should be given to additional detection and protection measures for women and girls with disabilities who are also vulnerable for other reasons, such as those pointed out above.

② Victims and suspected victims of trafficking and sexual exploitation with disabilities must be referred urgently to specialist services in this field. Personnel in these services must receive special training on disability and on the particular needs of persons with disabilities from a human rights perspective. Services for victims of trafficking must be fully accessible and able to offer any reasonable accommodation required, they must be available immediately for women and girls with disabilities, and they must provide these women with accessible and comprehensible information on their rights and on the medical, psychological, social and legal services at their disposal and how to access them.

③ Moreover, extra efforts should be made to ensure all women and girls with disabilities who are victims of violence, trafficking and sexual exploitation can access personal assistance services of their choosing as quickly as possible and receive financial support for basic survival that takes into consideration the additional costs associated with disability.

④ Prevent trafficking and sexual exploitation in all places where women, girls and persons with disabilities are resident by, among other steps, providing suitably supervised and separate accommodation and toilet and sanitation facilities for women and men and training refugee centre personnel to identify potential victims.

⑤ Adopt zero-tolerance policies to trafficking and sexual exploitation for anyone who assists or accompanies women and girls with disabilities who are displaced, refugees and/or asylum seekers.

⑥ Educate women and girls with disabilities, and especially those living in border regions, migrants in transit or who have reached their destination, on their rights, on how to recognise acts of trafficking and sexual exploitation, and on avoiding contact with traffickers.

- ⑦ Ensure access to reporting procedures and redress mechanisms for displaced, refugee and/or asylum-seeking women with disabilities who are victims of trafficking and sexual exploitation, while ensuring procedural adjustments and other reasonable accommodations in the justice system.
- ⑧ Ensure the full, effective and meaningful participation of women and girls with disabilities at all decision-making levels and during all stages of efforts to prevent and combat trafficking and sexual exploitation, in order to ensure responses take into proper consideration gender- and disability-related issues based on an approach that fully respects human rights.
- ⑨ States must consider adopting more severe sanctions for traffickers who exploit women and girls because they have a disability.

5. THE RIGHT TO LIVE INDEPENDENTLY AND BE INCLUDED IN THE COMMUNITY

Overall context

The right to live independently and to be included in the community covers all persons with disabilities, without exception and regardless of other personal, social or economic characteristics such as age, sex, race, ethnicity, gender identity, sexual orientation, nationality, status as a refugee or asylum seeker or any other condition.

As set out in article 19 of the UNCRPD, the main thrust of the right to live independently and be included in the community is to give persons with disabilities the freedom to decide how, where and with whom they wish to live. As a result, their personal choices in this respect are not limited to the place of residence but cover all aspects of the individual's life ... his or her schedule, routines, modes and lifestyles, both in the private and the public sphere and both on a day-to-day basis and in the long term. This means ensuring that persons with disabilities have access to personal assistance and other types of home-based support services they may need, as well as ensuring that the facilities and community services available to the general population are also available to them and responsive to their needs.

Consequently, migrant, refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities also enjoy the right to decide where and with whom they wish to live and the right to the personal assistance they need for their life and social inclusion and to avoid isolation.

The right to live independently and to be included in the community must be one of the guiding principles for public policies addressing persons with disabilities in armed conflict and humanitarian emergencies and throughout the entire displacement cycle. Inclusive responses from policy-makers and social agents must also consider the particular needs women and girls have due to their gender, which are greater in these contexts.

These rights must be respected both in refugee centres and in temporary settlements in other countries. To ensure the freedom a woman with disabilities should have to choose and exercise control over her own life, including the right to select personal assistance, there must be a direct, prior and duly informed consultation with the woman, with safeguards to avoid abuse, respect her wishes and preferences and ensure there are no conflicts of interest or undue influence by other members of the family, accompanying persons or professionals.

Women and girls with disabilities often face greater restrictions concerning their place of residence and way of life due to paternalistic stereotypes and patriarchal social models that discriminate against women in society. Moreover, they suffer higher levels of exclusion, isolation and institutionalisation and run a greater risk of falling victim to violence, including sexual violence, abuse and harassment at the hands of those around them. All of this is aggravated exponentially in conflicts and humanitarian emergencies.

In addition, cultural norms and values can also lead to restricted options and limits on the extent to which displaced and refugee women and girls with disabilities can exercise control over their own lives. They can reduce their independence and force them to live in a specific way, making them ignore their own needs and, instead, attend to the needs of others and adopt certain roles within the family.

As a result, for the right to live independently and be included in the community to be effective, humanitarian aid policies must pay particular attention to gender equality, to the elimination of intersectional discrimination against women from disadvantaged groups, and to the eradication of existing patriarchal social models.

RECOMMENDATIONS

- ① Ensure displaced, refugee and asylum-seeking women and girls with disabilities are consulted individually, privately and effectively on where, how and with whom they wish to live, as well as on any other question affecting them, including freedom of choice for personal assistance, with adequate safeguards to avoid abuse and respect their wishes and preferences. These consultations must be carried out by a woman in a safe place and in the native languages of the women and girls with disabilities. Where necessary, they should be performed using a mode of accessible communication chosen by the women and girls with disabilities (such as sign language, tactile interpretation, braille or any other alternative or augmentative modes or means of communication), and reasonable accommodations must be provided to support decision making.
- ② Refugee centres and humanitarian aid programmes must provide not only interpreters for the language of origin of the population receiving support, but also professionals to ensure that communication and access to information are accessible for all persons with disabilities.
- ③ Offer free personal assistance services to displaced, refugee and asylum-seeking women and girls with disabilities who need them to facilitate their daily living and social inclusion and avoid isolation. When assigning personal assistance, priority should be given to women who are victims of violence or at risk of violence, women with greater general support needs because of their disability, and women with disabilities who have sons, daughters or other relatives in their care.
- ④ Offer free, home-based support services to women with relatives with disabilities and women with disabilities who have

sons, daughters or other relatives in their care. In the latter case, home-based support must be compatible with personal assistance.

⑤ Make sure mainstream facilities and services in refugee centres are available to persons with disabilities and are sensitive to the needs of women and girls, in particular with respect to the availability of safe and accessible sanitation facilities, support for menstrual management, sexual and reproductive health services, and services for victims of violence and trafficking.

⑥ Put in place monitoring mechanisms, legal resources and reparations for all refugee and asylum-seeking persons with disabilities who use support services due to their disability or any other service which may be utilised by providers to propagate abuse or violence.

⑦ Carry out regular surveys and other consultations with women and girls with disabilities and women who have relatives with disabilities or dependent relatives in their care, on the physical, communication, environmental, infrastructural and attitudinal barriers they face as refugees and/or asylum seekers, and on their specific needs. The outcomes should be used to put into practise the principle of inclusion and the right to equality and non-discrimination by introducing positive action measures for these women in refugee centres and other destinations.

⑧ Ensure that humanitarian aid offered to displaced, refugee and asylum-seeking persons with disabilities is inclusive and based on community living. Segregation, separation and institutionalisation must never be an option.

⑨ Establish criteria to ensure that funding made available in response to disasters and humanitarian emergencies caused by armed conflict do not serve to perpetuate segregation and barriers to inclusion which exclude persons with disabilities, and in particular women and girls, from the community.

6. EDUCATION AND TRAINING

Overall context

According to UNESCO, a third of all boys and girls who do not attend school have a disability.

Millions of girls and women with disabilities are deprived of their right to an education due to interrelated forms of discrimination based on gender and disability. This exclusion from the right to any type of education faced by girls and women with disabilities, be it mainstream, inclusive or special education, is normally aggravated by other factors such as displacement or refugee and asylum-seeking status.

In situations of armed conflict and humanitarian emergencies, displacement brings specific obstacles to learning: human resources are lost, infrastructure is destroyed and, when escaping, many boys and girls leave behind the documents they will need to register for school in the destination country. Displacement may be particularly damaging to girls because some parents keep them at home due to heightened insecurity.

Girls and women with disabilities who suffer forced displacement and uprooting normally end up in refugee camps where there are no schools or schools are makeshift and have limited capacity, do not follow a curriculum, do not teach in their native languages or are inaccessible, so they are left out. Moreover, due to discriminatory stereotypes among those in charge of refugee camps and the services available in camps, they are normally referred to occupational activities, if at all.

This same discriminatory practise towards women and girls with disabilities is normally repeated when they leave refugee centres and move to another residence, generally in another country with a new language and culture they are unfamiliar with.

We must remember that although many governments officially espouse inclusive education, in practise boys and girls with disabilities continue to be excluded and segregated in special schools. This is particularly evident in the case of boys and girls with additional difficulties, such as displacement or refugee or asylum-seeking status.

The reasons for the low school attendance rates among displaced, refugee or asylum-seeking girls with disabilities are similar the world over: facilities and the education system in general are inaccessible; teachers and school administrators have negative attitudes towards foreign students with disabilities matriculating at their schools; curricula and teaching materials are not adapted to meet their needs; and, more generally, there is stigmatisation and lack of awareness within the education community, leading to negative attitudes concerning these girls' and women's ability to learn.

Furthermore, schools do not normally have teachers who are trained to meet the particular needs of refugee and asylum-seeking girls with disabilities, to teach them the language (including the sign language and alternative systems of oral communication), to teach digital literacy and for education in sexual and reproductive health, among other topics.

What is more, these girls with disabilities rarely have school certificates to prove their academic record as they often come from segregated special education systems which are not officially recognised in their countries of origin.

RECOMMENDATIONS

- ① Ensure that curricula, teaching materials and teaching strategies for people who are displaced, refugees and/or asylum seekers are adapted to the specific needs of persons with disabilities and include a gender and human rights perspective.
- ② Make sure all girls and women with disabilities are able to access all education and training services available within programmes for displaced, refugee and/or asylum-seeking persons and that legal, physical, social, financial, attitudinal, communication and language barriers, and any other type of obstacles, are detected and removed in centres of education and the communities where these people live.
- ③ Adopt those measures needed in the host country to ensure that women and girls do not suffer discrimination at any level of the education system, while facilitating their access to an inclusive education system and ensuring reasonable accommodations are in place to meet any particular needs they may have.
- ④ Facilitate certification of the academic records of boys and girls with disabilities in their country of origin, even when they do not have official documents to prove it.
- ⑤ Ensure displaced, refugee and/or asylum-seeking girls and women with disabilities receive language training in their host countries, including sign language and alternative systems of oral communication, as well as computer training and sexual and reproductive education.
- ⑥ Make sure girls with disabilities are properly protected against bullying and sexual violence in education settings, and offer them support, if needed, to manage menstrual hygiene.

⑦ Put in place temporary special measures to foster the education and training of girls and women with disabilities who are displaced, refugees and/or asylum seekers, including grants and awareness-raising activities targeting them and their families.

7. EMPLOYMENT

Overall context

In general, employment rates for women with disabilities worldwide are lower than those of men with disabilities and women without disabilities. When there are other, interrelated factors that aggravate the starting point for women with disabilities in terms of accessing the labour market, such as age, race, ethnicity, sexual orientation, gender identity, refugee or asylum-seeker status, among many, the employment rate is negligible in comparison with their peers.

Refugee and/or asylum-seeking women with disabilities are normally excluded from the labour market, not only due to the numerous obstacles they face due to accessibility problems and as a result of negative stereotypes based on gender, disability and xenophobic discourse, but also for other, much deeper reasons due to their status as refugees and asylum seekers.

When these women reach the receiving country accompanied by their children or other dependent relatives, the initial priority is survival and keeping the family unit together at all cost. In these circumstances and aggravated by the fact that many are widows and/or victims of sexual violence as a consequence of armed conflict, the risk of trafficking, sexual exploitation and servitude these women face is particularly high.

We must also consider that few refugee women with disabilities will have had paid employment, even in their countries of origin. This starting point, with little or no work experience, as well as a lack of vocational training in line with the demands of the labour market and the new socio-cultural context,

unfamiliarity with the language, digital illiteracy and no smartphones and access to internet, coupled with not having support services to care for their children or other dependent relatives, mean they are destined to remain outside the labour market in their new countries of residence.

If, despite all of the above, a refugee woman with disabilities secures a decent position, she is frequently a victim of discrimination during the recruitment process and in terms of job retention, promotion, salaries and access to training, credits and other productive resources, all of which have an indirect impact on her future stay in the host country.

RECOMMENDATIONS

- ① Offer tailor-made responses for quality vocational training, paid apprenticeships and access to the labour market to women with disabilities and mothers of sons and daughters with disabilities who are refugees and/or asylum seekers.
- ② Introduce effective support measures for refugee and/or asylum-seeking women with disabilities to help them find and retain decent, quality employment.
- ③ Ensure the availability of reasonable accommodations which refugee women with disabilities may need to work and offer them the technical aids and other assistance they require.
- ④ Promote the transition of mothers of sons and daughters with disabilities who are refugees and/or asylum seekers from the informal to the formal economy and provide relevant social protection systems, including access to childcare facilities and day-care services for dependent persons.
- ⑤ Deliver inclusive digital literacy courses aimed at refugee women and girls with disabilities, facilitate the acquisition of low-cost, accessible digital devices such as tablets and smartphones, and offer free internet access.



- ⑥ Promote programmes to learn the local language among refugee and/or asylum-seeking women with disabilities, including learning sign language and the use of other oral communication support when necessary.

- ⑦ Carry out awareness-raising campaigns among women with disabilities and women who have relatives with disabilities in their care regarding vocational training opportunities, job offers, labour rights, preventing harassment in the workplace and other resources available to reconcile personal life and professional life.

8. SOCIAL PROTECTION AND ECONOMIC EMPOWERMENT

Overall context

The World Bank estimates that in low- and medium-income countries women constitute 75% of all persons with disabilities.

Poverty and marginalisation are compounded when gender and disability intersect with displacement and refugee and/or asylum-seeking status. In these contexts, women with disabilities face additional obstacles that prevent access to suitable, accessible housing, to healthcare, including sexual and reproductive health services, to quality vocational training and to decent employment to earn a living, on an equal footing with other people, due to cultural and gender-based prejudices, xenophobic and ableist discourses, shortcomings in accessibility and a lack of resources.

Countries that receive women and girls with disabilities do not have effective support schemes in place to enable them to find and retain quality employment, nor do they have suitable social protection programmes for them.

Moreover, refugee and asylum-seeking women and girls face particular barriers when it comes to accessing social benefits due to disability, since many of them acquired their disability as a result of armed conflict in their home countries or during displacement.

There is widespread concern that the support mechanisms in place to ensure an income are being undermined in the context of global austerity even in high-income countries, and this could have profound consequences for displaced, refugee and asylum-seeking women with disabilities in terms of the risk of poverty.

RECOMMENDATIONS

- ① Take specific steps to reduce poverty and deprivation among refugee and/or asylum-seeking women with disabilities.
- ② Facilitate the immediate issuance of disability certificates to refugee and asylum-seeking women and girls with disabilities and ensure they are aware of and receive disability benefits in the destination country. Where necessary, provide information in this respect in accessible formats and in their native languages, including in sign language and alternative systems of oral communication.
- ③ Ensure access to family-based social benefits for refugee and/or asylum-seeking women with disabilities and mothers of children with disabilities and eliminate the specific barriers these women face because of their limited access to information, unfamiliarity with the language, digital illiteracy and lack of internet access.
- ④ Ensure refugee and/or asylum-seeking women with disabilities and mothers of children with disabilities enjoy access to decent, accessible housing.
- ⑤ All economic benefits granted to refugee and/or asylum-seeking women due to their own disability or a relative's disability should be handed over directly to the beneficiaries and the intervention of third-party intermediaries should be avoided.
- ⑥ Offer accessible training to women with disabilities on the use and value of the currency in the host country.
- ⑦ Facilitate bank loans, mortgages and other types of financial credit for refugee and/or asylum-seeking women with disabilities and the mothers of sons and daughters with disabilities.
- ⑧ Foster the participation of refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities in social, cultural and sports activities.

9. RESPECT FOR THE HOME AND FAMILY

Overall context

Erroneous stereotyping related to disability and gender is a type of persistent intersectional discrimination against women and girls with disabilities that exists worldwide and has particularly negative consequences when it comes to enjoying the right to found a family. Their reproductive capacity, freedom to have a partner and freedom to decide how many children they want to have are limited or denied, including via legislation or customary law. These same harmful stereotypes, normally founded on concepts such as incapacity or inability, can mean that mothers with disabilities disproportionately lose contact with and the custody of their sons and daughters, who are then subjected to adoption procedures or are placed in an institution under the guardianship of a third party. Furthermore, the husband may be granted separation or divorce, as well as the sole custody of the children, on the grounds that the wife has a disability.

These gender- and disability-based stereotypes impact other women negatively through discrimination by association if they care for their sons and daughters with disabilities or other dependent relatives. Discrimination by association often becomes an obstacle to employment opportunities or reduces considerably such opportunities for the women concerned because it is believed they will be less committed or not be as available to work because of their children with disabilities.

Moreover, as a result of paternalistic stereotypes and patriarchal social models that discriminate against women in society, women and girls with

disabilities in many parts of the world suffer social isolation, segregation and exploitation within the family setting. More specifically, they are excluded from family activities, banned from leaving the home, forced to perform unpaid domestic tasks and not allowed to go to school. In these contexts, when a woman or girl with a disability is married (and this is especially true of women and girls with intellectual disabilities), it is often justified on the grounds that it will bring security, care and future economic stability. At the same time, child marriages contribute to the high rates of school drop-out and early and frequent childbirth among girls with disabilities.

In addition, women and girls with disabilities are subjected to the same harmful practises perpetrated against women and girls without disabilities, such as early and/or forced marriage, female genital mutilation, non-voluntary sterilisation, crimes committed in the name of “honour”, violence over dowries and practises related to widowhood, among others.

When countries limit the legal capacity of a woman or girl with disabilities through legislation, or allow individuals and institutions to do the same, despite the legal obligations they are under by virtue of international human rights law, they are not only denying that person’s right to equality with men and with other citizens; they are also restricting that person’s ability to meet her own needs and those of the relatives under her care.

All of the situations set out here are compounded in the case of women and girls with disabilities and for women who care for relatives with disabilities when they are displaced or become refugees and/or asylum seekers. Migration and humanitarian aid policies must, therefore, consider these populations and establish specific measures to ensure they are taken care of adequately.

RECOMMENDATIONS

- ① Recognise the *de jure and de facto* right of all refugee and/or asylum-seeking women with disabilities to marry and enter into civil unions, as well as to found a family on the basis of free and full consent of the intending spouses, regardless of their disability,

sexual orientation, gender identity or any other personal circumstance. This includes the right to decide where and with whom they wish to live.

② Recognise the *de jure and de facto* right of all refugee and/or asylum-seeking women with disabilities to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the means necessary for them to exercise this right, such as to family planning services and sex education.

③ Provide adequate training and assistance, including personal assistance and free, home-based help, to mothers with disabilities to enable them to exercise their obligations and responsibilities with respect to custody and parenting their sons and daughters. The relevant public authorities should ensure in particular that under no circumstances is a son or daughter separated from his or her mother due to one or both of them having a disability.

④ Facilitate free, home-based support for refugee women who have relatives with disabilities or dependent relatives in their care, as well as access to childcare facilities and day centres for dependent persons.

⑤ When the immediate family cannot take care of refugee and/or asylum-seeking boys and girls with disabilities, alternative care options should be made available within the wider family; if this is not possible, then within the community and in a family setting.

⑥ Protect refugee and/or asylum-seeking women and girls with disabilities and prevent them from becoming victims of early or forced marriages or civil unions, something which may happen during displacement, and make sure all detected cases are investigated and, where appropriate, prosecuted.

- ⑦ Ensure refugee centres provide prevention and protection services to women and girls who are victims of harmful practises or run a high risk of falling victim to these practises (including, among others, early or forced marriage, female genital mutilation, non-voluntary sterilisation, crimes committed in the name of “honour”, violence related to dowries and practises related to widowhood), making sure that these services are inclusive and accessible and include a free, 24-hour helpline to allow victims to report such practises.
- ⑧ Foster the physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of women and girls with disabilities who fall victim to harmful practises.
- ⑨ Facilitate urgent family reunification for displaced, refugee and/or asylum-seeking women and girls on the grounds of disability.



¡SOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD!

Guía para proporcionar una asistencia adecuada
en situaciones de conflictos armados
y emergencias humanitarias

SOS FOR WOMEN AND GIRLS WITH DISABILITIES!

A guide to providing appropriate assistance
in situations of armed conflict and humanitarian
emergencies

Esta Guía ha sido elaborada por la Fundación CERMI Mujeres, a solicitud del CERMI, en el marco del Proyecto ODS UE, financiado por la convocatoria de subvenciones de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la realización de actividades relacionadas con la promoción e implantación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en España.

Con esta herramienta se pretende ofrecer un asesoramiento efectivo a responsables públicos y agentes sociales sobre la atención a mujeres y niñas con discapacidad desplazadas, refugiadas y/o solicitantes de asilo, ante la ausencia de una respuesta específica, sistemática e inclusiva para su acogida por España o por otros países europeos. Bajo el principio fundamental de “Nada para nosotras sin nosotras”, la Guía ha tomado en consideración las recomendaciones emanadas de los testimonios de vida de algunas mujeres con discapacidad ucranianas y de relatos de madres de hijos e hijas con discapacidad forzadas a huir de sus territorios por los efectos del conflicto armado, así como de la experiencia de sus organizaciones representativas y de otras entidades de la sociedad civil de países fronterizos implicados en la ayuda humanitaria para personas con discapacidad.

Pese a que la Guía surge en el contexto de la guerra de Ucrania y de la respuesta de ayuda humanitaria ofrecida por los países europeos a su población civil, el asesoramiento y recomendaciones que aquí se presentan podrían ser trasladables a otros contextos geográficos y a otras situaciones de riesgo y emergencias humanitarias en donde igualmente se debería asegurar una atención adecuada a las mujeres y niñas con discapacidad y a otras mujeres al frente de familias de personas con discapacidad o en situación de dependencia. Se publica también en inglés para que pueda servir a otros operadores más allá de España.

Acceso digital:

